



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

**“El principio de proporcionalidad en las
sentencias penales y la seguridad jurídica, a
propósito del caso Silvana Buscaglia Zapler”**

PRESENTADO POR

Bach.

Montoya Torres, Jairo Alexander

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

ASESORA

Mag.

Colina Moreno, Mary Isabel

LAMBAYEQUE, 2019

Tesis denominada “El principio de proporcionalidad en las sentencias penales y la seguridad jurídica, a propósito del caso Silvana Buscaglia Zapler”, presentada para optar el TÍTULO DE ABOGADO, por:

Bach. Jairo Alexander Montoya Torres.

Autor

Mag. Mary Isabel Colina Moreno.

Asesora

Aprobado por:

Abog. Carlos Manuel Martínez Oblitas
Presidente

Dr. Amador Nicolás Mondoñedo Valle
Secretario

Abog. César Vargas Rodríguez.
Vocal

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA N° 236

Sustentación para optar el Título de Abogado de don: **Jairo Alexander Montoya Torres**.
En la ciudad de Chiclayo, en la Sala de sustentaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; siendo las 6:00 p.m. del día lunes 16 de diciembre del 2019, se reunió el Jurado conformado por los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE	: Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.
SECRETARIO	: Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE.
VOCAL	: Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ.

Con el objeto de calificar la sustentación del Bachiller **Jairo Alexander Montoya Torres**, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante la Modalidad de Presentación, Sustentación y Aprobación de Tesis.

El señor Presidente invita al sustentante para que exponga la Tesis titulada: "**EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS SENTENCIAS PENALES Y LA SEGURIDAD JURÍDICA, A PROPÓSITO DEL CASO SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER**".

Rendido por el bachiller: **Jairo Alexander Montoya Torres**, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", autorizado con Resolución N° 230-2019-UI-FDCP-UNPRG, de fecha 11 de diciembre del 2019, en cumplimiento al requisito para optar el Título Profesional de ABOGADO, exigido en el Reglamento del Vicerrectorado de Investigación y de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho.

Obteniendo el siguiente resultado: *Aprobado*.....con la nota de *17/16*... y el calificativo de... *Buena*... y apto para obtener el Título Profesional debiendo cumplir con las exigencias de las normas legales vigentes.

Siendo las *19:10*... p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado la presente acta.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinente.

Chiclayo, lunes 16 de diciembre del 2019.

Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
Secretario del Jurado

Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado

Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Vocal del Jurado.

DEDICATORIA

Al amor de mi vida, Yanela Huamán
Chafloque, por su apoyo incondicional día a
día, ya que sin ella no habría sido posible la
realización del presente trabajo.

AGRADECIMIENTO

A mis padres, por el apoyo constante en el transcurso de toda mi carrera, y porque hasta la fecha me impulsan a seguir creciendo profesionalmente.

INDICE

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
INDICE	v
INDICE DE TABLAS	ix
INDICE DE GRÁFICOS	xi
RESUMEN.....	xii
ABSTRACT	xiii
INTRODUCCIÓN	14
CAPITULO I	17
ASPECTOS METODOLOGICOS	17
1.1. Realidad Problemática	17
1.1.1. Planteamiento del Problema.	17
1.1.2. Formulación del Problema	18
1.2. Justificación e Importancia del Estudio	19
1.2.1. Justificación del Estudio	19
1.2.2. Importancia del Estudio.....	20
1.3. Objetivos.....	21
1.3.1. Objetivo General	21
1.3.2. Objetivos Específicos	21
1.4. Hipótesis	21

1.5. Variables	22
1.5.1. Variable Independiente	22
1.5.2. Variable Dependiente	22
1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección	22
1.6.1. Métodos	22
1.6.2. Técnicas	23
1.6.3. Instrumentos	24
MARCO TEÓRICO	27
CAPITULO II	28
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y SU APLICACIÓN EN LAS SENTENCIAS PENALES.	28
2.1. Antecedentes del problema.	28
2.2. Constitucionalización del proceso penal.	30
2.3. La proporcionalidad como principio básico.....	32
2.3.1. El principio de proporcionalidad en la doctrina.....	32
2.3.2. El principio de proporcionalidad y la ponderación como su resultado.	33
2.3.3. Proporcionalidad, test de proporcionalidad y razonabilidad	35
2.3.4. Fundamentos del principio de proporcionalidad.....	37
2.3.5. Origen del principio de proporcionalidad en el Perú y fundamento constitucional	40
2.4. El principio de proporcionalidad	42

2.4.1. Las fases del principio de proporcionalidad	43
2.4.2. El principio de proporcionalidad, críticas, acerca de su subjetividad	51
CAPITULO III	53
ESTUDIAR LA TEORÍA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL.....	53
3.1. La Teoría de la Seguridad Jurídica:.....	53
3.2. Elementos de la seguridad jurídica.....	55
3.3. Clases De Seguridad Jurídica.	56
3.4. La seguridad jurídica y el derecho penal.....	59
CAPÍTULO IV	61
ANÁLISIS Y RESULTADOS	61
Análisis del caso de Silvana Buscaglia Zapler en relación al resultado de las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque.	61
4.1. Análisis de los resultados:	62
4.1.1. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.	63
CAPÍTULO V.....	78
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	78
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	78
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente el principio de proporcionalidad para verificar su aplicación en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque”	78

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la teoría de la seguridad jurídica en el proceso penal”	83
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar el caso de Silvana Buscaglia Zapler para relacionarlo con el análisis de las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque”	86
5.2. Resultado De Validación De Variables.....	93
5.3. Contrastación De Hipótesis.....	95
CONCLUSIONES	97
RECOMENDACIONES	99
Bibliografía	100
ANEXOS	103
1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.....	103

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Cuadro de expedientes seleccionados para el análisis de sentencias correspondientes a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 63

Tabla 2: Resultado de la aplicación de la Guía de observación, aplicada sobre las sentencias de los expedientes seleccionados en la tabla 1, de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 64

Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque. 66

Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque. 68

Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque. 70

Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque. 72

Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque. 74

Tabla 8: Resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.	76
Tabla 9: Cuadro comparativo de la contrastación de hipótesis.	96

INDICE DE GRÁFICOS

Ilustración 1: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.	67
Ilustración 2: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque	69
Ilustración 3: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque	71
Ilustración 4: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque	73
Ilustración 5: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque	75
Ilustración 6: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque	77

RESUMEN

La seguridad jurídica es un principio que busca optimizar la forma en que se desarrolla la actividad del derecho a fin de conseguir su finalidad otorgando la viabilidad del cumplimiento de las garantías que para el derecho penal corresponden a la protección de los derechos fundamentales que aseguren el bienestar de las partes en el proceso. Tal garantía dependerá entonces de la forma en que se desarrollen ciertas actividades clave dentro del proceso, tal es el caso de la imputación de los delitos, así la calificación de las acciones que se presumen como delitos deberá tener cierta característica en su ejecución, para lo cual el mismo derecho alcanza herramientas cuyo uso permite que la identificación de la punibilidad del acto sea apropiada, tal es el caso de la proporcionalidad como principio.

Tal estructura facilita pues, la correcta valoración de los actos en cuestión, siendo así, la inquietud de esta investigación esta dirigida a la evaluación de las sentencias penales dictadas en el distrito judicial de Lambayeque con la finalidad de identificar la existencia o ausencia de aplicación del principio de proporcionalidad para la imputación de los delitos, resultado que se deberá contrastar con el nivel de seguridad jurídica que se observará en los fallos, todo ello tomando como referencia los excesos advertidos en el caso de la ciudadana Silvana Buscaglia Zapler.

Palabras Claves: Principio de proporcionalidad, seguridad jurídica, caso Silvana Buscaglia Zapler.

ABSTRACT

Legal security is a principle that seeks to optimize the way in which the activity of law is carried out and in order to achieve the purpose of giving the viability of compliance with the guarantees that the criminal law corresponding to the protection of fundamental rights that ensure the welfare of the parties in the process. Such a guarantee depends on the form in which it can be developed in the key activities within the process, as well as in the case of the imputation of the crimes, as well as in the qualification of the actions that have been presumed as it must have a certain characteristic in its execution, for what is the same right? How to use?

This structure facilitates, thus, the correct valuation of the acts in question, being this way the concern of this investigation. This wording is based on the evaluation of the most important phrases in the judicial district of Lambayeque. principle of proportionality for the imputation of crimes, a result that must be contrasted with the level of legal security observed in the judgments, all that is known as reference to advertising excesses in the case of citizen Silvana Buscaglia Zapler.

Key Words: Principle of proportionality, legal security, case Silvana Buscaglia Zapler.

INTRODUCCIÓN

Despierta el interés de esta investigación la verificación de circunstancias en la realidad del desarrollo procesal penal, la aplicación de ciertas sanciones que no guardan relación con la producción del daño sobre el bien jurídico protegido por los tipos penales, lo cual constituye desproporcionalidad ante lo cual se ubica como respuesta inmediata de la concepción de principios base del derecho penal, a la aplicación de la proporcionalidad como examen de estos criterios que terminan vulnerando derechos fundamentales.

Esta tarea lleva al razonamiento de la constitucionalización del Derecho Penal en los Estados que se precien de ser democráticos, resultando esta acción más que necesaria imperativa; es precisamente esta la finalidad del presente trabajo la de exteriorizar la relevancia del estudio, análisis y aplicabilidad del principio de proporcionalidad en la resolución de casos penales, tomando como referencia un caso emblemático de la realidad como es el mediatizado proceso de Buscaglia Zepler, en el que se impuso una sanción máxima por una conducta que no provocó mayor lesión o daño al bien jurídico protegido por el tipo penal que se utilizó para el reconocimiento de la responsabilidad penal.

Es en base a estas circunstancias que la investigación se proyectó con la siguiente formulación del problema: ¿Qué efecto produce la correcta aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque sobre la seguridad jurídica en el proceso penal, a propósito del caso de Silvana Buscaglia Zapler?

Tal cuestionamiento provocó una respuesta de carácter a priori en base a los conocimientos previos al desarrollo de la tesis, construyéndose de la siguiente manera: Si, la aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque es inexistente; entonces, se estará produciendo un efecto negativo

sobre la seguridad jurídica en el proceso penal, por lo mismo que deberá proyectarse su exigencia a fin de evitar excesos como el caso de Silvana Buscaglia Zapler.

Estas dos figuras metodológicas han sido consideradas desde la perspectiva que enfocan las variables que a manera de componentes las construyen bajo una relación causal, siendo esa misma razón la que inspiró al objetivo general así como a los específicos que en tanto metas de la investigación han permitido dotar de contenido a la investigación.

El Capítulo I, se describe la estructura metodológica que fue aplicada para el desarrollo de la investigación, así se puede apreciar la sindicación del planteamiento del problema pasando por su justificación e importancia, la puntualización de las metas de la investigación y los métodos que fueron utilizados para el reconocimiento de la realidad jurídica que engloba la investigación propuesta.

Luego el Capítulo II se ocupó de la descripción del principio de proporcionalidad para buscar la relación que tiene con la emisión de las sentencias penales así, se traslada información desde el origen del mismo principio sus fuentes y las fases que comprende la aplicación de su examen como parte del control constitucional.

Seguidamente en el Capítulo III, se desarrolló la teoría de la seguridad jurídica para que con el recojo de sus bases se pudiera establecer su connotación en el proceso penal, la relación que tienen sus elementos con el desarrollo de las garantías que se entienden están incorporadas en el código procesal.

A continuación el Capítulo IV, se concentró en la observación de la realidad la misma que por su naturaleza práctica se concentró en el recojo de la opinión de los operadores jurídicos respecto a la concepción del principio de proporcionalidad y la

necesidad de su control sobre el proceso penal en tanto la aplicación de las sanciones contenidas en los tipos penales.

Finalmente en el Capítulo V, se puede apreciar la construcción de la contrastación de la hipótesis, la misma que se inicia con la discusión de cada uno de los objetivos, tomando el protagonismo el análisis de la proporcionalidad en el caso emblemático de Buscaglia Zepler, a fin de establecer el perjuicio ocasionado en tanto desequilibrio jurídico, en función de lo cual se logró validar cada una de las variables y por último contrastar la hipótesis final con la inicial, para llegar luego a establecer las conclusiones y recomendaciones que se someten al criterio evaluador del jurado de la investigación.

El Autor.

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLOGICOS

1.1. Realidad Problemática

1.1.1. Planteamiento del Problema.

En las dos últimas décadas los Estados Latinoamericanos siguiendo la corriente neo constitucionalista han dotado de mayor fuerza vinculante a sus respectivas Constituciones Políticas, sujetando todo el ordenamiento jurídico a la norma fundamental.

El Derecho Penal evidentemente al estar vinculado a los derechos fundamentales más preciados del ser humano, tales como la vida, la libertad, la dignidad humana, y otros, es más que imperativo que se someta al control constitucional, vale decir que sus reglas, tanto sustantivas como procesales tienen que encontrarse en concordancia con la gama de principios y garantías de orden constitucional.

En ese contexto, uno de los principios constitucionales más relevantes lo constituye sin lugar a dudas el principio de proporcionalidad, en la medida resulta imperativa en aquellos supuestos en los que existan aparentes conflictos o confrontaciones entre principio-principio, principio garantía, garantía- garantía.

Ahora bien, en la doctrina nacional algunos autores cuestionan la verdadera importancia del principio de proporcionalidad en el ámbito constitucional, incluso ese escepticismo se acrecienta cuando nos adentramos al ámbito penal, estos autores *-en su mayoría operadores jurídicos-* postulan que el Derecho Penal debe estar sometido a sus propios principios previstos en el título preliminar del Código Penal y Procesal Penal, y

que las normas que contiene tanto el código sustantivo como procesal debe ser interpretados conforme a los alcances de dichos principios, lo cual consideramos erróneo.

Ya que la Constitución irradia todo el ordenamiento jurídico, en consecuencia los preceptos legales e infralegales necesariamente están sometidos a los principios de orden constitucional; es más, incluso el mismo Derecho Penal ha previsto este principio en su título preliminar (artículo VIII), por lo que su inaplicación por el órgano judicial en el caso concreto deviene en inaceptable y hasta cierto punto reprochable, que a la postre conlleva a la emisión de resoluciones irracionales y desproporcionales.

En efecto, es paradigmático los casos “Buscaglia Zapler” y “Chu Cerrato”, en los que la justicia penal en clara vulneración del principio de proporcionalidad condenó con pena efectiva a dichos ciudadanos por agredir verbalmente a efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Estos dos pronunciamientos judiciales emblemáticos demuestran que al principio de proporcionalidad en el ámbito penal no se le ha otorgado la importancia que merece, lo que a la postre conllevó a la emisión de decisiones arbitrarias e inconstitucionales que produjeron la restricción irracional de la libertad personal de dichos procesados, produciendo con ello un perjuicio irreparable desde todo punto de vista, deslegitimando la correcta administración de justicia.

1.1.2. Formulación del Problema

¿Qué efecto produce la correcta aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque sobre la seguridad jurídica en el proceso penal, a propósito del caso de Silvana Buscaglia Zapler?

1.2. Justificación e Importancia del Estudio

1.2.1. Justificación del Estudio

Con la presente investigación buscamos en principio estudiar detalladamente el principio de proporcionalidad y su aplicabilidad en el ámbito penal, para tal fin utilizaremos el método inductivo, esto es, a partir del análisis exhaustivo de dos casos concretos (sin perjuicio de los demás) buscaremos establecer algunas conclusiones que permitan defender nuestra tesis.

Asimismo, el presente trabajo, tiene como finalidad contribuir a la difusión y despertar el interés tanto, de investigadores, operadores de justicia y estudiantes de la importancia del estudio constitucional del derecho penal.

La constitucionalización del Derecho Penal en los Estados que se precien de ser democrático resulta más que necesaria imperativa; en la medida en que en los procesos penales surgen conflictos entre principios, garantías, y derechos fundamentales que ameritan la solución a través de la aplicación de categorías dogmáticas vinculadas al Derecho Constitucional, verbigracia, proporcionalidad, ello amerita un amplio conocimiento en esta materia por parte del operador jurídico que tenga a su cargo la resolución de este tipo de conflictos, es precisamente está la finalidad del presente trabajo la de exteriorizar la relevancia del estudio, análisis y aplicabilidad del principio de proporcionalidad en la resolución de casos penales.

La realización de la presente investigación se justifica en la medida en que nos permitirá conocer la importancia de la aplicación del principio de proporcionalidad en sede penal, pues consideramos que su correcta aplicación conlleva a la emisión de sentencias racionales, y al mismo tiempo contribuye a la efectivización de otros derechos

de rango constitucional, como los fines constitucionales de la pena, llámese resocialización, reeducación, y rehabilitación.

El conocimiento del tema objeto de investigación resulta relevante no solo para los estudiosos del derecho constitucional, sino y, sobre todo para los que cultivan el derecho penal, es más considerando el estudio pormenorizado y crítico que se pretende realizar de dos procesos penales emblemáticos (caso Buscaglia Zapler y Chu Cerrato) hace que la presente investigación resulte sumamente interesante y al mismo tiempo desafiante, lo que nos permitirá concientizar a los operadores jurídicos de la relevancia penal de una institución con contenido constitucional, como lo es el principio de proporcionalidad.

1.2.2. Importancia del Estudio

La investigación proyectada resulta de suyo importante puesto que aportará al debate doctrinal consideraciones conceptuales de orden no solo constitucional sino también penal, tanto sustantiva como procesal, es más consideramos que esta investigación resulta novedosa en la medida en que contribuirá a partir del análisis de casos específicos; demostrar que inaplicar el principio de proporcionalidad en procesos penales en los que se encuentran en debate derechos fundamentales genera múltiples perjuicios de diversa naturaleza no solo al mismo imputado, sino también al Estado, ya que el Derecho Penitenciario ha demostrado que la aplicación draconiana de ley penal produce, entre otros efectos negativos, una superpoblación penitenciaria que lógicamente genera mayor gasto estatal.

Otro aspecto importante que se pretende lograr con los resultados del estudio no sólo la pretensión de proponer la cobertura de los vacíos normativos el presente trabajo

permitirá llenar defectos de interpretación de las normas penales, especialmente referidos a las consecuencias jurídicas de los supuestos típicos, y al mismo tiempo demostrará que la racionalidad de las penas estará garantizada siempre que en los casos penales se aplique correctamente el principio de proporcionalidad.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Determinar el efecto que produce la aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque sobre la seguridad jurídica en el proceso penal, a propósito del caso de Silvana Buscaglia Zapler.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar doctrinariamente el principio de proporcionalidad para verificar su aplicación en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque.
- Estudiar la teoría de la seguridad jurídica en el proceso penal
- Analizar el caso de Silvana Buscaglia Zapler para relacionarlo con el análisis de las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque.

1.4. Hipótesis

Si, la aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque es inexistente; entonces, se estará produciendo un efecto negativo sobre la seguridad jurídica en el proceso penal, por lo mismo que deberá proyectarse su exigencia a fin de evitar excesos como el caso de Silvana Buscaglia Zapler.

1.5. Variables

1.5.1. Variable Independiente

La aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque.

1.5.2. Variable Dependiente

La seguridad jurídica en el proceso penal, a propósito del caso de Silvana Buscaglia Zapler.

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección

1.6.1. Métodos

Teniendo en cuenta que la presente investigación esta orientada al análisis de la aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales, se consideró apropiado hacer uso de los siguientes métodos, que han permitido el desarrollo de la observación de una forma adecuada y sistemática, así se puede señalar:

□ **Método exegético jurídico.** - Este método ha sido aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas respecto al principio de proporcionalidad y su aplicación en las sentencias penales; detalle que se ha logrado confrontar con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales pudo contrastarse la hipótesis planteada.

□ **Método sistemático jurídico.** - Este método fue empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico Constitucional que como tal marca la pauta de la aplicación del control constitucional que corresponde al principio de proporcionalidad como regla general y el ordenamiento jurídico Penal en lo que corresponde a la verificación de las reglas que permitan la aplicación del examen de proporcionalidad de la sanción cuyo resultado sirva de motivación a las sentencias penales que se emitan en el poder judicial, lo cual ha permitido arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.

Resultado que ha servido de base para el análisis de las sentencias penales que seleccionadas en el número de 10 expedientes de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con lo cual se ha podido identificar la ausencia del aplicación del principio de proporcionalidad.

1.6.2. Técnicas

En el desarrollo de este tema, se hicieron uso de las técnicas de recolección de la información que permitieron establecer los parámetros con los que se definió la propuesta, logrando plantear al final las sugerencia en función a los resultados.

□ **Análisis Documental.-** Se utilizaron fichas bibliográficas en razón de la recolección de libros texto y revistas indexadas publicadas sobre el tema de la proporcionalidad y la determinación de la pena; además de las fichas de investigación documental, referidas al análisis de sentencias que se han podido ubicar en los juzgados penales; etc., con lo cual se ha logrado obtener datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se han sido publicados en materia de Derecho Constitucional y Penal, específicamente respecto a la proporcionalidad aplicada a las sentencias penales.

□ **Observación.-** Se utilizó la guía de observación, con la cual se pudo observar la realidad socio jurídica que engloba la necesidad de ejercer el control constitucional a través de la aplicación del principio de proporcionalidad, para lo cual se construyó una guía de criterios a observar dentro de las sentencias seleccionadas, como son: la verificación de la aplicación del examen de proporcionalidad como base de la motivación de la sanción; la observación de la aplicación de tercios para la determinación de la pena; la aplicación directa de la sanción impuesta en los tipos penales; y, por último la aplicación de pena proporcional al daño causado.

□ **Encuesta.-** Se empleó la guía de encuesta; la cual fue aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son Fiscales, Jueces y especialistas, quienes han vertido sus opiniones respecto de la problemática sobre jurídica aplicada en las sentencias respecto al principio de proporcionalidad.

1.6.3. Instrumentos

Los instrumentos son los medios auxiliares que permitieron recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

□ **La Ficha.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y sirvió para localizar las fuentes bibliográficas sobre el principio de proporcionalidad, la aplicación de la sanción penal, las reglas de motivación y la sanción penal, las cuales se fueron incorporando a la investigación mediante el sistema de citas APA, respetando la estructura metodológica proporcionada por la universidad.

□ **La Guía de Observación.-** Instrumento que se utilizó en la técnica de la observación, y sirvió para realizar una observación directa no participante del objeto

materia de investigación, la cual se construyó en base a los siguientes criterios a observar dentro de las sentencias seleccionadas, como son:

- La verificación de la aplicación del examen de proporcionalidad como base de la motivación de la sanción;
- La observación de la aplicación de tercios para la determinación de la pena; la aplicación directa de la sanción impuesta en los tipos penales;
- La aplicación de pena proporcional al daño causado.

□ **La Guía de Encuesta.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica de la encuesta, y consistió en un conjunto de preguntas que se elaboraron para que sirvan de orientación en el dialogo que se tuvo con los encuestados que son los conocedores del tema, para lo cual se construyó en el sistema virtual de encuestas un cuestionario basado en los dos ejes temáticos de la investigación constituidos por las variables como son:

Independiente:

La aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque.

Dependiente

La seguridad jurídica en el proceso penal, a propósito del caso de Silvana Buscaglia Zapler.

En base a las cuales se construyeron afirmaciones que se presentaron a los encuestados a fin de que emitan su punto de vista de conformidad o disconformidad con lo indicado, alcanzando con ello a entender si es que el resultado permitía señalar que existe ausencia de conocimiento de los operadores jurídicos lo cual reflejó un conocimiento medio convirtiéndose en el indicador de la necesidad de capacitación, puesto que podría convertirse en la causa del problema de la ausencia del examen de

proporcionalidad en las sentencias penales analizadas de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

MARCO TEÓRICO

CAPITULO II

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y SU APLICACIÓN EN LAS SENTENCIAS PENALES.

Resulta de mucho interés el desarrollo de este capítulo, puesto que como eje principal de la investigación procurará los conocimientos teóricos necesarios que permitan luego establecer la importancia de la participación activa del principio de proporcionalidad en la delimitación argumentativa de los fallos a los que se arriba en las sentencias penales, tomando como referencia para el análisis los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.

Previo al reconocimiento de las concepciones que circundan al principio de proporcionalidad se debe tener en cuenta inicialmente la referencia de la tendencia jurídica referida a la constitucionalización del proceso penal, por lo que como primer punto se desarrolla a continuación:

2.1. Antecedentes del problema.

Para lograr un desarrollo adecuado de nuestra investigación hemos de tomar ciertas referencias de investigadores que han plasmado en sus trabajos, algunas ideas relacionadas con el tema que ahora abordamos, de las cuales tomaremos ciertas porciones que detallamos a continuación:

Así se toma como referencia la investigación realizada por Castañeda Deza(2016) quien en su tesis titulada: *El Principio De Seguridad Jurídica En La Determinación De La Pena En Las Circunstancias Atenuantes Privilegiadas Del Código Penal Peruano*, arriba la siguiente conclusión:

Los principios del Derecho Penal el no establecimiento de un límite mínimo en la determinación concreta de la pena de las circunstancias atenuantes privilegiadas del

Código Penal Peruano fueron vulnerados en las sentencias condenatorias emitidas por los juzgados colegiados en la Provincia de Trujillo luego de la dación de la Ley 30076 en la que se aplican las nuevas reglas para la determinación de la pena, durante los años: 2013-2014, son básicas tres, el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad, los mismos que importan la necesidad de un límite mínimo en la pena concreta de la aplicación de las atenuantes privilegiadas, porque la inexistencia de una regla determinativa, genera que no se cautela un mínimo de seguridad o conocimiento de la norma aplicable al operador jurídico y puede dar lugar a penas desproporcionales (pág. 92).

Tal cual lo reseñado por la investigadora citada se puede establecer que existen una relación directa con la investigación propuesta, toda vez que hace referencia a la seguridad jurídica como límite, y es que precisamente el poder punitivo del Estado ha de tenerlo con el fin de evitar la comisión de abusos o excesos al momento de la imputación de los delitos y más aun la imposición de las sanciones.

Resulta importante además verificar la relación que encuentra con el principio de proporcionalidad, circunstancia que se pretende abordar en esta labor académica proyectada, coincidiendo además con el análisis de un caso en particular como es la intención de este trabajo.

Por todo ello se da por sentado la viabilidad de la propuesta de investigación, ya que existen precedentes en este rubro, dada la importancia del análisis de realidad respecto de la importancia de la aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales a fin de garantizar el carácter garantista que le corresponde al derecho penal.

2.2. Constitucionalización del proceso penal.

La constitución en su categoría de norma supra juega un papel muy importante en el esquema del ordenamiento jurídico, así su principal función es la de controlar el poder estableciendo límites que caracteriza a la organización de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, estructura que se rige en base a principios y siendo precisamente que esta investigación se ocupará del desarrollo de uno de ellos como lo es la proporcionalidad, en cuanto al Derecho Penal corresponda; por lo mismo que se ha de considerar como parte del diseño de constitucionalización de esta rama del Derecho y así congraciarse con el garantismo que supone su desarrollo.

En ese sentido se ubica pues una relación muy estrecha entre la Constitución y el proceso penal, hoy más vigente que nunca, puesto que en ella se configuran los lineamientos y bases que dan sentido garantista al proceso, como anota Castro (2009) “la Carta Fundamental contiene un programa procesal penal que proyecta un determinado modelo procesal” (pág. 31), así también es de la misma postura Oré Guardia, quien es citado por el mismo autor:

(...) con razón se ha sostenido que la primera declaración de voluntad del Estado en materia penal está en la Constitución y no en los códigos. En todo caso, lo que hace el Código Procesal Penal es desarrollar los principios rectores que contienen la Carta Magna y los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos (pág. 31).

Pues bien, tal cual se aprecia de lo vertido, se corrobora la estrecha relación entre el proceso penal y la constitución, encontrándose en ello el origen del derecho penal garantista que tiene por finalidad desarrollar el proceso de la investigación en base al respeto de los derechos fundamentales de las partes que intervienen en él; que duda cabe que este direccionamiento garantista genera el cuestionamiento respecto a lo parcializada

que resulta tal seguridad jurídica, dado que se inclina mayormente a la protección del presunto agente del delito.

Al respecto el profesor Landa Arroyo (2015) en su artículo jurídico titulado: *La Constitucionalización Del Derecho Procesal Penal: El Nuevo Código Procesal Penal Peruano En Perspectiva*, en el cual ante el cuestionamiento sobre la constitucionalización del proceso penal lanza el siguiente razonamiento:

(...) hoy en día, el ordenamiento jurídico penal –sustantivo, procesal y de ejecución– no puede entenderse sin el respeto del orden público constitucional convencionalizado. Pero muchos jueces que ejercen la función jurisdiccional no suelen aplicar los principios constitucionales. Es como si los procesos penales, en los cuales la tutela de derechos fundamentales debería ser más intensa, todavía fueran ajenos a la Constitución convencionalizada (pág. 182).

Es evidente pues la relación entre norma y proceso notándose además la percepción de una realidad alejada de la necesaria característica constitucional, agregando Landa el hecho de que debiera considerarse a la convencionalidad como otro elemento indispensable en la labor del juzgador; al parecer la crítica estará referida a la ausencia de uniformidad mas bien, antes que a la ausencia absoluta del respeto de los principios rectores.

Circunstancia que resulta necesaria dado el requerimiento del uso de las herramientas que otorga el derecho mismo para conseguir la eficacia del proceso, entendiendo a los principios como las reglas que permiten alcanzar la optimización, ello bajo lo entendido por la muy conocida frase de James Goldschmidt (1961), (...) la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución” (pág. 10). Definitivamente esta frase conduce al entendimiento de la importancia de la constitucionalización del proceso penal, que ha de ser guiada en razón de la estructura que marca la constitución bajo el manto de su rigidez.

De otro lado resulta importante también citar lo ya señalado por el maestro Roxin (2000), citada por innumerables autores, que nos sirve de introducción, para este apartado: “El derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado” (pág. 10); la afirmación deja más clara aún la relación jurídica que genera la sugerencia de analizar la efectividad del proceso penal en razón de la aplicación de los principios que inspiran la constitución, especialmente el de proporcionalidad, a fin de reconocer su eficacia garantista.

2.3. La proporcionalidad como principio básico.

Luego de haber comprendido la ligazón jurídica existente entre la Constitución y el Proceso Penal, corresponde hacer el desarrollo teórico de la concepción del término proporcionalidad como principio jurídico cuya aplicación conlleva a un resultado que es la ponderación, este ejercicio es lo que sin duda consigue esclarecer la prevalencia de derechos y en consecuencia la garantía de protección que se presume del Estado a través de la Constitución.

2.3.1. El principio de proporcionalidad en la doctrina.

Para reseñar un acercamiento a la definición de la proporcionalidad se ha considerado tener en cuenta la postura del investigador Bernal Pulido, que la ubicamos en la introducción realizada al libro de Aleinikoff (2015):

[...] el principio de proporcionalidad permitiría al juez llevar a cabo el control de constitucionalidad sin verse constreñido a elegir un tipo de escrutinio a aplicar. Este efecto haría que el control de constitucionalidad fuese más sistemático y transparente. Frente a este respecto, quizás el derecho constitucional norteamericano tenga una lección que aprender de la práctica de las cortes constitucionales europeas y latinoamericanas (pág. 18).

Lo anteriormente reseñado da la dirección que ha de cumplir el principio de proporcionalidad como herramienta que permite la optimización del derecho en cuanto se refiere a la aplicación de las reglas bajo la estructura que erige la Constitución de cada Estado.

En base a la finalidad plasmada se puede recoger también la definición de la proporcionalidad tomando como ruta lo indicado por Sanchis (2002), que sobre ella indica como requerimiento que:

(...)la medida examinada presente un fin constitucionalmente legítimo como fundamento de la interferencia en la esfera de otro principio o derecho, pues si no existe tal fin y la actuación pública es gratuita, o si resulta ilegítimo desde la propia perspectiva constitucional, entonces no hay nada que ponderar porque falta uno de los términos de la comparación” (pág. 145).

2.3.2. El principio de proporcionalidad y la ponderación como su resultado.

Debemos precisar, que la ponderación aplicada en Estados Unidos o la ponderación como tal, es distinta del principio de proporcionalidad de Europa continental (Europa y Latinoamérica), que además la comprende; esta última será la que estudiaremos, sin embargo, es menester referirnos a la ponderación estadounidense, a efectos de contrastarla puntualmente, considerando que se trata de una problemática difusa, pues estos dos conceptos son considerados equivalentes por algunos, otros por su parte las consideran como parte-todo, entre otras posturas.

Así tenemos, que la ponderación, como señala Aleinikoff (2015), en cuanto a sus orígenes en norte américa, señala, “como método explícito de interpretación constitucional apareció primero en las opiniones mayoritarias de finales de la década de

1930 y a comienzos de la década de 1940” (pág. 32); señalando además: “que analiza una cuestión constitucional identificando los intereses implicados en el caso y llega a una decisión” (pág. 23), de lo cual se puede concebir a la ponderación como el resultado que conlleva a solucionar cualquier tipo de intereses relacionados con los derechos que se recogen en la Constitución y cimentan el garantismo del proceso penal.

Si bien es cierto este desarrollo se direcciona a entender la ponderación antes que la proporcionalidad como categoría jurídica, es prudente indicar que ello resulta de suma importancia pues tal cual se observa en los orígenes se entiende como el resultado de la evaluación de un determinado conflicto, observación hecha desde la perspectiva constitucional, lo cual se identifica como el ejercicio del propio control del Estado, buscando regular su ius puniendi al resguardo de las garantías que corresponden a las partes intervinientes en el proceso penal.

Entonces, lo que se busca es el equilibrio social a través de ese control social ejercido sobre la estructura del proceso penal que sin duda alguna está compuesto de reglas las mismas que están inspiradas en los principios de la Constitución del Estado, con el afán de resolver las posibles controversias que surjan como consecuencia de la aplicación del derecho en razón de dicha construcción jurídica.

La apreciación jurídica de una suerte de interpretación es contemplada por el jurista Bernal Pulido en su artículo jurídico titulado

Todo aquél que pretenda excluir de la ponderación las apreciaciones subjetivas del juez, incurre entonces en hiperracionalidad. Es meridiano que la tarea de determinar el contenido normativo de los principios siempre depara al juez un margen de deliberación. Dentro de este margen, el juez adopta diversas apreciaciones normativas y empíricas, relativas a controversias concernientes a preguntas tales como de qué tanta libertad dispone el individuo en un Estado Constitucional, qué restricciones pueden o

deben ser impuestas al principio de la mayoría, o hasta qué punto puede un Estado Social intervenir en la economía a fin de garantizar la redistribución de las condiciones materiales para lograr el bienestar y asegurar que cada individuo disfrute por lo menos de su procura existencial

2.3.3. Proporcionalidad, test de proporcionalidad y razonabilidad

Como veremos, el Tribunal Constitucional peruano, ha utilizado los términos test de proporcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad indistintamente, así entonces, debemos precisar, siguiendo las definiciones puntuales que esboza Marcial Rubio (2011), en cuanto al principio de razonabilidad:

Exige que los actos que los sujetos realizan frente al hechos y circunstancias, cumplan con el requisito de ser generalmente aceptados por la colectividad como adecuada respuesta a los retos que presenta la realidad frente al actuar humano jurídicamente relevante. Dichos actos deben estar sostenidos en argumentos de razonamiento objetivos y no subjetivos, en valores y principios aceptados. Debe haber tratamiento imparcial de las personas y, cuando sea pertinente, se debe aplicar la regla “donde hay la misma razón, hay el mismo derecho” (Rubio, 2011, p.20)

La proporcionalidad la define como:

El principio de proporcionalidad mide la calidad o la cantidad de dos elementos jurídicos (o de elementos con relevancia jurídica) comparativamente entre sí, de manera que no haya un exceso de volumen, de significación o de cuantía entre uno y otro en base a las consideraciones que se hacen en relación a cada tiempo y lugar (Rubio, 2011, p.20)

Por su parte nos dice que el test de proporcionalidad: “[...] tiene razón de ser como un procedimiento metodológico para casos determinados, que aporta luz en ciertas circunstancias a la razonabilidad y la proporcionalidad en una determinada concurrencia de la realidad” (Rubio, 2011, p.21).

Barak (2017), en cuanto al test de proporcionalidad, al que el denomina “proporcionalidad” nos dice:

La proporcionalidad es una construcción jurídica. Ella es un instrumento metodológico. La proporcionalidad está compuesta por cuatro componentes; el fin adecuado, la conexión racional, los medios necesarios y la relación adecuada entre el beneficio ganado con la realización del fin adecuado y la vulneración causada al derecho fundamental (este ultimo componente se denomina también “proporcionalidad *en sentido estricto*” (ponderación)) (p.159)

El autor nos dice que, es gracias a los componentes enumerados anteriormente, que la noción de proporcionalidad se concretiza y se viabiliza en la práctica, precisa adicionalmente que algunos ordenamientos, flexibilizan el test, considerando tres componentes, por otro lado, otros ordenamientos que solo estiman los componentes como recomendaciones y no requisitos. Sin embargo, el autor destaca que, es necesaria que se cuente con una estructura, dado que así se dota de contenido a la proporcionalidad y se garantiza la protección de los derechos (Barak, 2017, p.160).

2.3.4. Fundamentos del principio de proporcionalidad

Bernal Pulido, en su estudio preliminar de la obra de Aleinikoff (2015), nos dice, en cuanto a su fundamento:

La construcción que subyace a la estructura del principio de proporcionalidad tiene una profunda raíz en la propia esencia de las constituciones políticas de la última era del constitucionalismo latinoamericano. Algo muy importante de entender es la forma en que funciona el régimen constitucional de la libertad, dentro del modelo de Estado que estas constituciones establecen, es decir, el llamado Estado Social de Derecho. Como es bien sabido, el Estado Social de Derecho, no es un modelo que haya supuesto una ruptura con la idea tradicional del Estado de Derecho, sino solo una transformación de esta idea para amoldarla a las desigualdades sociales. Ahora bien, la idea tradicional del Estado de Derecho supone que el individuo es el fin del funcionamiento del Estado y no que el Estado sea el fin del funcionamiento del individuo. En este sentido, la protección de la libertad es lo que justifica la existencia del Estado. La libertad es la regla general y el punto de partida de toda la regulación jurídica y del funcionamiento del Estado. De ahí que la norma de cierre del ordenamiento jurídico sea aquella según la cual todo lo que no está explícitamente prohibido a los particulares, les está permitido, o, en otras palabras: es una posición de libertad, y no la contraria, es decir, aquella que prescribe que todo lo que no está explícitamente permitido, está prohibido. Correlativo a este principio es la norma según la cual, los poderes públicos no pueden hacer sino aquello para lo que tengan una competencia específica, prevista por el ordenamiento jurídico (pp.12-13).

Sin embargo, agrega que, las libertades no son absolutas, pues ello resultaría un caos, haciendo vigente la ley del más fuerte, y es ahí donde entra a tallar la razón de ser

del Estado, quien debe velar por compatibilizar el ejercicio de libertades y sus restricciones (Aleinikoff, 2015, p.13), así finaliza diciendo:

Esta justificación es la base de la competencia del Estado para restringir la libertad. Sin embargo, la imposición de las restricciones a la libertad debe estar sometida, a su vez, a múltiples restricciones -o sea, las restricciones de las restricciones o, como se suele expresar en la jurisprudencia constitucional: los límites de los límites—. Es evidente que el ejercicio del poder estatal para restringir la libertad puede desembocar en abusos y en la propia vulneración de la libertad. Por esta razón, resulta imprescindible imponer límites formales y materiales a la competencia estatal para restringir la libertad. Las reservas de ley y de jurisdicción son los principales límites formales. El principio de proporcionalidad es el principal límite material. De esta forma, si el Estado respeta los límites formales y materiales, impondrá a la libertad restricciones acordes con la Constitución. Si, por el contrario, no los respeta, las restricciones estatales estarán viciadas de inconstitucionalidad (pp.13-14).

Es menester también agregar lo sostenido por Barak (2017), en cuanto a la aplicación del test de proporcionalidad nos dice:

[...] se asume que el derecho fundamental en cuestión ha sido sometido a una restricción a través de una medida infraconstitucional (tal como una ley o una decisión judicial. La cuestión que se plantea es ¿cuál es la base – tanto formal como sustantiva – de esta restricción? La respuesta es que esta base se encuentra en la proporcionalidad, que se sitúa a su vez en la cláusula restrictiva (sea esta explícita o implícita) expresada en la constitución (p.159)

Rubio (2011), en el caso del fundamento constitucional peruano, nos dice:

el desarrollo del test de proporcionalidad comenzó a partir de una reflexión sobre la razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones constitucionales: el Tribunal encontró ambos conceptos en la parte final del artículo 200 de la Constitución, referidos a circunstancias en las que se ha establecido el régimen de excepción y se plantea un *habeas corpus*, y consideró que ambos principios debían ser extendidos a toda la vida constitucional y, en verdad, a todo el derecho. De allí, pasó progresivamente a considerar que la razonabilidad y la proporcionalidad están contenidas en el test de proporcionalidad (pp. 11-12)

En ese sentido, podemos precisar que el fundamento constitucional de la proporcionalidad subyace del artículo 200 de la Constitución parte final:

[...] El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137° de la Constitución.

Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio.

Pues, como bien afirma Rubio (2011)

El constituyente aplicó la razonabilidad y la proporcionalidad al análisis del caso de *hábeas corpus* interpuesto a favor de un derecho restringido por un acto de gobierno. Eso es lo que nos dice la interpretación literal y la ubicación sistemática de ambos principios dentro del texto de la Carta

Sin embargo, la decisión del Tribunal de extender la validez de la razonabilidad y la proporcionalidad a todo el derecho es correcta. Después de todo, de lo que se trata es de que la vida jurídicamente regulada tenga ambas características: sea razonable y proporcional. Ha sido un acierto del Tribunal exigir estos requisitos en el más amplio sentido de la palabra (p.19).

2.3.5. Origen del principio de proporcionalidad en el Perú y fundamento constitucional

En cuanto al origen histórico, Barak (2017) nos dice, “las raíces históricas de la proporcionalidad como estándar del derecho público se encuentran en el derecho administrativo alemán decimonónico” (p.207), comenta también, que fue Carl Gottlieb Svarez, quien viabilizó el desarrollo de la noción de proporcionalidad, desde una perspectiva social incluso sin denominarla *proporcionalidad*.

Sin embargo, agrega:

La proporcionalidad como concepto jurídico positivo —opuesto a la noción social ideal de Suarez— comenzó a aparecer en el derecho administrativo prusiano en la segunda mitad del siglo XIX. El término proporcionalidad (*Verhältnismäßigkeit*) aparece en la doctrina del derecho administrativo alemán hacia finales del siglo XVIII. En aquel tiempo, se discutió la proporcionalidad en el contexto del derecho policial (*Polizeirecht*), que servía como marco general al derecho administrativo prusiano. No obstante, el concepto mismo fue desarrollado principalmente por el Tribunal Supremo Administrativo de Prusia (p.208).

Es a partir de ahí que migra a la Unión Europea, la CEDH, Canadá, Asia, África y así sucesivamente, llegando finalmente a España desde donde se han inspirado los ordenamientos latinoamericanos (Barak, 2017, pp.213-232).

Marcial Rubio, sostiene que el test de proporcionalidad en el Perú ve la luz a inicios del siglo XXI; en su obra realiza un estudio acerca del origen del test de proporcionalidad, la esbozaremos sucintamente, nos dice que la primera referencia data de agosto del 2002, recae en el expediente 0649-2002-AA-TC, en el que ya se advierte un camino hacia el planteamiento de un test, que en líneas generales, recoge lo planteado por el Tribunal Constitucional español de 1995, igualmente se puntualiza la vinculación con la noción de igualdad. Así también precisa que, se confunde al test de proporcionalidad, denominándolo de racionalidad, mostrando aún desconocimiento en su aplicación por parte del Tribunal Constitucional peruano, posteriormente se emiten pronunciamientos en los que también se hace alusión al test de proporcionalidad, así como a la razonabilidad de modo indistinto (Rubio, 2011, pp.11-12-13).

Sin embargo, como el mismo autor nos dice, se consolida con la sentencia 0045-2004-PI-TC (Rubio Correa, 2011, p.11), caso Colegio de Abogados de Cono Norte Lima contra Artículo 3° de la ley N° 27466 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, expedida el 29 de octubre de 2005 así podemos apreciarlo, en el fundamento cuarto rotulado como “§4. Estructura del principio de proporcionalidad en el análisis de la infracción de la igualdad”:

33. Este principio ha de emplearse a través de sus tres subprincipios, de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Conforme a esto, los pasos que se han de efectuar para ello son los siguientes:

a) Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la prohibición de discriminación. b) Determinación de la "intensidad" de la intervención en la igualdad. c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin). d) Examen de idoneidad. e) Examen de necesidad. f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación

Al respecto también Rubio (2011) nos dice: “es importante recordar que en los inicios del test de proporcionalidad en nuestra jurisprudencia estuvieron directamente ligados al derecho de igualdad [...] Esto conduce a que el primer elemento tenga que ver específicamente con este derecho” (p.22). Sin embargo, acota que los primeros literales (“a” y “b”) son aplicados en escasos procesos, en pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional posteriores, se hace referencia únicamente a que, el test está conformado por los literales “d” al “f”, nos indica finalmente que, la parte sustantiva del test de proporcionalidad está compuesto por los literales del “c” al “f” (Rubio, 2011, p.22)

2.4.El principio de proporcionalidad

Bernal Pulido, en su estudio preliminar de la obra de Aleinikoff (2015), nos dice: [...] la ponderación es un elemento del llamado principio de proporcionalidad, un concepto de procedencia germana que los tribunales constitucionales de América Latina han acogido. En concreto, este principio es un concepto que aparece en la jurisprudencia constitucional de Alemania, España y muchos otros países (lista en la que, aunque resulte un tanto paradójico, no se encuentra en Estados Unidos), como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales que resulta vinculante para los poderes públicos el uso de este principio se ha ido extendiendo al examen de las intervenciones

legislativas, administrativas y judiciales sobre todos los derechos fundamentales, en las que sobre todo su tercer elemento: la ponderación, se ha vuelto casi imprescindible (p.9).

Agrega:

La aplicación del principio de proporcionalidad, en general y de la ponderación, en particular; parte del supuesto de que los derechos fundamentales deben ser interpretados de manera amplia, como principios que ordenan que su objeto se realice en la mayor medida posible de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas que jueguen en sentido contrario (p.12).

2.4.1. Las fases del principio de proporcionalidad

. Prieto Sanchis (2002), refiriéndose, a lo que entendemos también por ponderación, nos dice:

es aquella que hace referencia a la acción de considerar imparcialmente los aspectos contrapuestos de una cuestión o el equilibrio entre el peso de dos cosas. En la ponderación, en efecto, hay siempre razones en pugna, intereses o bienes en conflicto, en suma, normas que nos suministran justificaciones diferentes a la hora de adoptar una decisión. Ciertamente, en el mundo del Derecho, el resultado de la ponderación no ha de ser necesariamente el equilibrio entre tales intereses, razones o normas; al contrario, lo habitual es que la ponderación desemboque en el triunfo de alguno de ellos en el caso concreto. En cambio, donde sí ha de existir equilibrio es en el plano abstracto: en principio, han de ser todos del mismo valor, pues de otro modo no habría nada que ponderar; sencillamente, en caso de conflicto se impondría el de más valor. Ponderar es, pues, buscar la mejor decisión (la mejor sentencia, por ejemplo) cuando en la

argumentación concurren razones justificatorias conflictivas y del mismo valor (pp.128-129).

Sin embargo, debemos precisar, como el mismo Prieto (2002) señala citando al Tribunal Constitucional Español, STC 320/1994: “no se trata de establecer jerarquías de derechos ni prevalencias *a priori*, sino de conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos o libertades, ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eficacia recíproca” (p.136).

En otras palabras, nos dice, que, la finalidad de la ponderación es establecer en el caso concreto, la prevalencia de uno de ellos, preservándose abstractamente cada uno, pues el resultado de la aplicación de la ponderación deriva del caso bajo análisis, y es por esa razón que tal resultado, no es vinculante a todo el ordenamiento jurídico.

Sanchis (2002), nos dice que básicamente, la ponderación cuenta con cuatro fases, la primera, “que la medida examinada presente un fin constitucionalmente legítimo como fundamento de la interferencia en la esfera de otro principio o derecho, pues si no existe tal fin y la actuación pública es gratuita, o si resulta ilegítimo desde la propia perspectiva constitucional, entonces no hay nada que ponderar porque falta uno de los términos de la comparación” (p.145)

En cuanto a la segunda, nos dice:

“En segundo lugar, la máxima de la ponderación requiere acreditar la adecuación, aptitud o idoneidad de la medida objeto de enjuiciamiento en orden a la protección o consecución de la finalidad expresada; esto es, la actuación que afecte a un principio o derecho constitucional ha de mostrarse consistente con el bien o con la finalidad en cuya virtud se establece. Si esa actuación no es adecuada para la realización de lo prescrito en una norma constitucional, ello significa que para esta última resulta indiferente que se adopte o no la medida en cuestión; y entonces, dado que sí afecta, en cambio, a la realización de otra norma constitucional, cabe excluir la legitimidad de la intervención. En realidad, este requisito es una prolongación del anterior: si la intromisión en la esfera de un bien constitucional no persigue finalidad alguna o si se muestra del todo ineficaz para alcanzarla, ello es una razón para considerarla no justificada.

La intervención lesiva para un principio o derecho constitucional ha de ser, en tercer lugar, necesaria; esto es, ha de acreditarse que no existe otra medida que, obteniendo en términos semejantes la finalidad perseguida, resulte menos gravosa o restrictiva. Ello significa que si la satisfacción de un bien constitucional puede alcanzarse a través de una pluralidad de medidas o actuaciones, resulta exigible escoger aquella que menos perjuicios cause desde la óptica del otro principio o derecho en pugna. No cabe duda que el juicio de ponderación requiere aquí, de los jueces, un género de argumentación positiva o prospectiva que se acomoda con alguna dificultad al modelo de juez pasivo propio de nuestro sistema, pues no basta con constatar que la medida enjuiciada comporta un cierto sacrificio en aras de la consecución de un fin legítimo, sino que invita a "imaginar" o "pronosticar" si ese mismo resultado podría obtenerse con una medida menos lesiva” (pp.145-146).

La última, pero no menos importante, nos dice que es la proporcionalidad en sentido estricto:

la ponderación se completa con el Atinado juicio de proporcionalidad en sentido estricto que, en cierto modo, condensa todas las exigencias anteriores y encierra el núcleo de la ponderación, aplicable esta vez tanto a las interferencias públicas como a las conductas de los particulares. En pocas palabras, consiste en acreditar que existe un cierto equilibrio entre los beneficios que se obtienen con la medida limitadora o con la conducta de un particular en orden a la protección de un bien constitucional o a la consecución de un fin legítimo, y los daños o lesiones que de dicha medida o conducta se derivan para el ejercicio de un derecho o para la satisfacción de otro bien o valor; aquí es donde propiamente rige la ley de la ponderación, en el sentido de que cuanto mayor sea la afectación producida por la medida o por la conducta en la esfera de un principio o derecho, mayor o más urgente ha de ser también la necesidad de realizar el principio en pugna (p.147).

Bernal Pulido también en el estudio preliminar de la obra de Aleinikoff (2015) nos dice:

el principio de proporcionalidad está compuesto por tres subprincipios: el subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad, y la ponderación o subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Cada uno de los subprincipios expresa una exigencia que toda intervención en los derechos fundamentales debe cumplir. Tales exigencias pueden ser enunciadas de la siguiente manera:

1. Según el subprincipio de idoneidad, toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Se trata, entonces, de dos exigencias: la legitimidad

constitucional del objetivo y la adecuación de la medida examinada. En cuanto a la primera exigencia, para que una medida no sea legítima, debe ser claro que no busque proteger ningún derecho fundamental, ni otro bien jurídico relevante. Por su parte, de acuerdo con la segunda exigencia, para que dicha medida no carezca de idoneidad, debe tener algún tipo de relación fáctica con el objetivo que se propone; es decir, debe contribuir de alguna manera a la protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante.

2. De acuerdo con el principio de necesidad, toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho intervenido, entre todas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. Se trata, entonces, de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles, comparación en la cual se analiza: (1) la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo; y, (2) el menor grado en que éste intervenga en el derecho fundamental.³ En fin, conforme al principio de proporcionalidad en sentido estricto, la importancia de los objetivos perseguidos por toda intervención en los derechos fundamentales debe guardar una adecuada relación con el significado del derecho intervenido. En otros términos, las ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental deben compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la sociedad en general. Se trata, entonces, de la comparación entre dos intensidades o grados, el de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación de derecho fundamental. Mediante esta comparación, por ejemplo, se prohíbe que una afectación intensa de la libertad o de otro derecho fundamental sea correlativa tan solo a una protección mínima o leve de otro derecho o bien jurídico (pp.10-11)

Bernal Pulido en la reseña de la obra de Alinikoff (2015), en cuanto a la proporcionalidad nos dice:

Si una medida de intervención en los derechos fundamentales no cumple las exigencias de estos tres subprincipios, vulnera el derecho fundamental intervenido y por esta razón debe ser declarada inconstitucional. Los subprincipios de la proporcionalidad son invocados ordinariamente de forma conjunta y escalonada en los fundamentos jurídicos de las sentencias del Tribunal Constitucional. Por consiguiente, el principio de proporcionalidad debe ser considerado como un concepto unitario. Cuando los tribunales constitucionales lo aplican, indagan si el acto que se controla persigue un propósito constitucionalmente legítimo y si es adecuado para alcanzarlo o por lo menos para promover su obtención. Posteriormente, los tribunales verifican si dicho acto adopta la medida más benigna con el derecho fundamental intervenido, entre todas aquella que reviste por lo menos la misma idoneidad para conseguir el objetivo propuesto. Por último, evalúan si las ventajas que se pretende obtener con a intervención estatal, compensan los sacrificios que se derivan para los titulares de los derechos fundamentales afectados y para la propia sociedad (pp.11-12)

Por su parte para Barak (2017), la proporcionalidad tiene como componentes, el fin adecuado, la conexión racional, la necesidad y la necesidad en sentido estricto (la ponderación), en cuanto a la primera:

[...] una de las principales características de las democracias constitucionales se encuentra en el hecho de que la autorización jurídica para la restricción un derecho fundamental no es suficiente. Desde el punto de vista jurídico tener dicha autorización no equivale a tener legitimidad. Por el contrario, una democracia constitucional requiere, que la restricción del derecho fundamental para ser válida no sólo sea legal, sino que se encuentre justificada. En otras palabras, se exige el componente de la legitimidad. Este

elemento está compuesto por el fin adecuado y los medios para alcanzar tal fin, los cuales deben restringir el derecho fundamental de manera apropiada. En este capítulo se discute acerca del primero de estos componentes: el componente de la proporcionalidad relativo al fin adecuado.

El elemento del fin adecuado refleja un componente con carga axiológica. Él refleja la noción según la cual no todo fin puede justificar una restricción de un derecho fundamental. Una de las características únicas de un derecho fundamental es que él puede ser restringido solo con el objeto de alcanzar aquellos fines que pueden justificar una restricción a tal derecho. Los fines que justifican restringir un derecho fundamental se derivan de los valores en los que se funda la sociedad. En una democracia constitucional, estos valores corresponden a los valores democráticos. De hecho, un fin adecuado es aquél que se adapta a los valores de la sociedad en una democracia constitucional (pp.276-278).

El examen del fin adecuado se circunscribe únicamente a establecer si lo que se busca con la medida, se justifique con el fin que sea desea alcanzar, es decir, básicamente, se analiza la finalidad de la medida. Respecto de la conexión racional, que en palabras del propio Barak (2017):

[...] el requisito de la conexión racional exige que los medios usados por la medida restrictiva se ajusten a (o estén conectados racionalmente con) el fin para el cual la medida restrictiva ha sido diseñada a cumplir [...] Por consiguiente, se requiere que los medios escogidos sean pertinentes para la realización del fin, en el sentido de que la medida restrictiva incremente la probabilidad de su realización. En consecuencia, si la realización del medio no contribuye a la realización del fin de la medida, el uso de tales medios no será proporcional. (p.337).

En cuanto a la necesidad (test de necesidad), nos dice:

El test de necesidad (Erforderlichkei). También se conoce este test como el requisito de “los medios menos restrictivos”. De acuerdo con este test, el legislador debe escoger —de todos los medios que pueden promover el propósito de la medida restrictiva— aquel que menos restrinja el derecho humano en cuestión (Barak, 2017)

Es decir, nos dice que el fin que se espera alcanzar debe ser únicamente alcanzado por ese medio y no otro alternativo, que pudiese restringir menos el derecho en cuestión, en consecuencia, es a través de este test, en el que se determina el medio a utilizar para lesionar en menor medida el derecho fundamental.

Finalmente tenemos la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, que según el autor, sería:

De acuerdo con la proporcionalidad *en sentido estricto*, con el objeto de justificar una restricción a un derecho fundamental, debe existir una relación adecuada (“proporcional” en el sentido estricto del término), entre los beneficios que se obtienen del cumplimiento del fin y la vulneración causada al derecho fundamental con la obtención de tal fin (p.375).

Así también nos dice que, “pondera los beneficios y la vulneración al derecho fundamental. Este test requiere una congruencia adecuada entre los beneficios y la vulneración del derecho fundamental” (p.375). Por otro lado, nos comenta

Él se aplica si el fin de la medida restrictiva es el de proteger otro derecho fundamental o si el fin de la misma es el de proteger el interés público. Toda medida restrictiva de un derecho protegido a nivel constitucional debe cumplir el test de proporcionalidad *en sentido estricto* (p.377).

En concreto señala que la ponderación es un proceso “analítico” en el que se colocan sobre la balanza, por un lado, la finalidad de la medida restrictiva y al otro lado

el derecho fundamental que se pretende restringir trae a colación lo sostenido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso *Sporrong*:

El Tribunal debió determinar si se había logrado una ponderación justa entre todas las exigencias propias del interés general de la comunidad y los requerimientos propios de la protección de los derechos fundamentales individuales...La búsqueda de esta ponderación es inherente a la totalidad de la Convención.

2.4.2. El principio de proporcionalidad, críticas, acerca de su subjetividad

Prieto (2002), nos dice, refiriéndose a todas las fases de la proporcionalidad,

No creo que pueda negarse el carácter valorativo y el margen de discrecionalidad que comporta el juicio de ponderación. Cada uno de los pasos o fases de la argumentación que hemos descrito supone un llamamiento al ejercicio de valoraciones: cuando se decide la presencia de un digno de protección, no siempre claro y explícito en la decisión enjuiciada; cuando se examina la aptitud o idoneidad de la misma, cuestión siempre discutible y abierta a cálculos técnicos o empíricos; cuando se interroga sobre la posible existencia de otras intervenciones menos gravosas, tarea en la que el juez ha de asumir el papel de un diligente legislador a la búsqueda de lo más apropiado; y en fin y sobre todo, cuando se pretende realizar la máxima de la proporcionalidad en sentido estricto donde la apreciación subjetiva sobre los valores en pugna y sobre la relación "coste beneficio" resulta casi inevitable (pp. 147-148)

Sin embargo, nos dice, a su vez, que, ello:

[...] tampoco significa que la ponderación estimule un subjetivismo desbocado, ni que sea un método vacío o que conduzca a cualquier consecuencia, pues si bien no garantiza una y sólo una respuesta para todo caso práctico, sí nos indica qué hay que fundamentar para resolver un conflicto constitucional, es decir, hacia dónde ha de

moverse la argumentación a saber: la justificación de un enunciado de preferencia (en favor de un principio o de otro, de un derecho o de su limitación) en función del grado de sacrificio o de afectación de un bien y del grado de satisfacción del bien en pugna (pp.148-149).

CAPITULO III

ESTUDIAR LA TEORÍA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL

3.1. La Teoría de la Seguridad Jurídica:

Respecto a esta teoría podemos decir que se ha escogido por ser justamente el eje temático central de la investigación, pues nos proporcionará la base del conocimiento para en su momento poder establecer si la actividad que se desarrolla en la investigación realizada en el proceso penal en el afán de la protección de las garantías que otorgan los derechos fundamentales.

Tomando lo reseñado por el autor Carbonell Miguel (2004), en su obra: *Derechos fundamentales y acción de inconstitucionalidad*, donde sobre la finalidad de la seguridad jurídica como derecho indica lo siguiente: “(...) esto quiere decir que todas las personas deben de tener un mínimo de seguridad jurídica que les garantice contra el desahucio, el hostigamiento y otras amenazas. Para lograrlo, el estado debe de tomar medidas en primer término de carácter legislativo” (pág. 85).

La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de segura) que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino

que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.

ALZAMORA, M (1987)

La seguridad constituye uno de los fines generales del Derecho. La relación existente entre seguridad, justicia y Derecho ha sido enfocada desde diversas perspectivas. Cuenca Anaya, citado por Gonzáles Loli, al respecto señala que, el Derecho no ha nacido en la vida humana por virtud del deseo de rendir culto u homenaje a la idea de justicia, sino para colmar la ineludible necesidad de seguridad y de certeza en la vida social”. En este contexto, surge la seguridad jurídica. Para Alzamora Valdez, constituye sentido de estabilidad que ofrece al individuo la sociedad al apreciar su conducta”. Por su parte, Díez-Picazo define la seguridad jurídica como la asequibilidad, conocimiento y certidumbre del sistema normativo aplicable a un caso o a una situación determinada, de tal manera que se puedan predecir o pronosticar, con algún fundamentos, los resultados o las consecuencias que de la situación puedan derivar.

BALAREZO F (1998)

Define la seguridad jurídica como el conocimiento que cada uno tiene sobre las consecuencias de cualquier acto realizado, los efectos de una norma o los límites de su

esfera de actuación. Por nuestra parte, definimos la seguridad jurídica como la certeza que deben tener los miembros de una sociedad de que el sistema jurídico que regula sus relaciones va a proteger eficazmente sus derechos, o que su conflicto de intereses o incertidumbre jurídica pueden resolverse con cierto grado de predictibilidad.

3.2. Elementos de la seguridad jurídica.

La seguridad jurídica no surge mágicamente o de modo espontáneo a partir de que se ha expedido oficialmente por el órgano legislativo una declaración escrita (por más que ésta, al igual que el Estado, sea una precondition); su existencia real emana de la conjugación de diversos elementos que se traducen objetivamente en una situación o circunstancia concreta. La seguridad jurídica, grosso modo, es básicamente producto de la existencia e interrelación de tres factores:

- a) Una norma sustantiva, compuesta por disposiciones vigentes que reconozcan derechos o establezcan obligaciones;
- b) Una norma adjetiva, representada por procedimientos y reglas que hacen posible la instrumentación y aplicación de la norma sustantiva, y
- c) Órganos estatales encargados de la aplicación de las mismas en lo que se conoce como el proceso de impartición de justicia.

El orden y la paz pública en el campo dependen de la eficacia intrínseca de cada uno de estos factores y del grado de armonía con que funcionalmente se entrelacen. No es aventurado aseverar que, al igual que las circunstancias económicas, en ellos descansa en mucho la gobernabilidad de una nación. En ese sentido, para que en un ámbito cualquiera predomine una atmósfera de seguridad es menester que dichos factores se acerquen lo más posible a su paradigma ideal, el cual sostiene que la norma sustantiva debe ser general, abstracta e impersonal pero, esencialmente, justa; la norma adjetiva debe

establecer reglas instrumentales y procedimientos sencillos, expeditos y transparentes, y el órgano estatal debe ser responsable, especializado e imparcial, lo que significa, ante todo, honesto. La más mínima desviación de dicho modelo normativo desemboca en estados o circunstancias concretas de inseguridad jurídica, en sus sentidos objetivo y subjetivo, propiciando injusticias que en un descuido pueden conducir a desórdenes sociales. Cabe comentar que cuando las normas sustantivas son esencialmente injustas, por mucho que los procedimientos sean eficaces y el aparato público encargado de aplicar el derecho positivo sea lo más honesto y especializado posible, o a la inversa, de poco sirve una norma sustantiva justa y reglas instrumentales ágiles en manos de un órgano estatal corrupto. La diferenciación de estos tres factores es tan clara que cada uno de ellos es competencia de diferente disciplina.

3.3. Clases De Seguridad Jurídica.

La seguridad jurídica presenta dos aspectos complementarios entre sí, uno objetivo y otro subjetivo.

A. Seguridad Jurídica Objetiva.

La percepción de la seguridad jurídica bajo el carácter de objetiva se puede entender parafraseando al investigador jurídico español Luna Serrano (2015), quien en su libro: *La seguridad jurídica y las verdades oficiales del derecho*, señala que:

La seguridad jurídica objetiva, en cuanto que, como natural reflejo, denota la certeza subjetiva sobre la posición propia de cada uno en la vida social en lo que afecta a nuestra condición y a nuestra capacidad, sobre nuestras posibilidades concretas, para todos iguales, de establecer vínculos y relaciones con los demás y sobre nuestra aptitud para la adquisición de derechos y para la asunción de obligaciones, es una exigencia moral que se constituye, como permanente "besoin de certitude et sécurité", en uno de los rasgos más característicos de la eticidad que es propia del derecho. Puede pensarse, por eso, frente a la específica consideración de la certeza (págs. 47-48).

La definición objetiva parte de la existencia previa de condiciones materiales dadas, es decir, la prevalencia de un determinado orden jurídico y de un aparato público al que se le confía su aplicación.

B. Seguridad Jurídica Subjetiva

De las palabras del investigador Arrázola Jaramillo, Fernando (2014f), quien en su artículo jurídico titulado: *El concepto de seguridad jurídica, elementos y amenazas ante la crisis de la ley como fuente del derecho*, señala sobre la seguridad jurídica que:

“es uno de los valores o principios más importantes de un ordenamiento jurídico, pues sin ella no resulta posible la convivencia pacífica entre los ciudadanos, ni posible la planificación o ejecución de un plan de vida individual o colectivo; (ii) es la primera y más importante manifestación de un Estado de derecho bien dispuesto, en razón a que sirve como freno y control al poder del Estado y de sus agentes, lo cual constituye una de las principales justificaciones de obediencia al derecho” (pág. 23).²³.

La seguridad jurídica desde la perspectiva subjetiva debe entenderse como una certidumbre del Derecho; es decir, como la certeza de que cualquier eventual atentado contra el patrimonio o la vida serán efectivamente conjurados por la sociedad y la organización estatal. Esto implica, desde luego, la confrontación del individuo con el entorno social objetivo que lo envuelve. Esto es, se requiere la perceptibilidad cierta del Derecho, de la norma jurídica y de su aplicación al caso concreto. De otra suerte, tal certidumbre no pasaría de ser un mero dogma o una simple creencia. Briseño Sierra al respecto señala que “La certeza permite, en los sistemas de derecho escrito, constatar o confrontar documentalmente la existencia de la norma. Tener certeza es conocer la existencia de una norma jurídica, pero tener la seguridad es saber probadamente su sentido positivo. En innumerables ocasiones el mismo precepto es aplicado en sentidos diferentes, lo que produce certeza de su ser e inseguridad de su significado.”

Según lo ubicado del investigador Geiger, T (1983), se puede hacer una clasificación de la seguridad jurídica en dos dimensiones diferentes: a) Como seguridad de orientación o certeza del ordenamiento, y, b) Como seguridad de realización o confianza en el ordenamiento.

a) Como seguridad de orientación o certeza del ordenamiento.

Se puede decir que ésta existe cuando se conoce cabalmente el significado del contenido y sentido de lo que se establece en una norma, lo que equivale a un “saber a qué atenerse”; según sus palabras: “Yo sé qué tipo de acción esperan o no esperan de mí los otros, y sé también qué conducta he de esperar o no de los demás. Sé con claridad qué tipos de acciones y en qué situaciones por mi parte y por parte de los otros, están libres de riesgo en un sentido absolutamente definido, a saber, libres de riesgo de arrastrar tras de sí los inconvenientes sociales del tipo denominado “reacción pública”. En resumen y dicho popularmente: conozco mis deberes y mis derechos. No obstante, si las leyes son imprecisas, complicadas, rápidamente cambiantes; si las competencias de los órganos de la administración no están claramente circunscritas y la práctica de los tribunales es variable, me encuentro en la inseguridad de orientación: no sé con qué conducta caigo en la zona de riesgo social.

b) Como seguridad de realización o confianza en el ordenamiento.

La seguridad de realización o confianza en el ordenamiento existe cuando se tiene la certidumbre de que lo dispuesto en la proposición normativa habrá de aplicarse en caso de que alguien incurra en la hipótesis prevista por la misma. En consecuencia, se dice que existe falta de seguridad jurídica cuando la legislación: “Deja al criterio de los órganos de la administración un margen de libertad demasiado grande, de tal manera que nadie sabe de antemano qué clase de decisión prefiere tomar la autoridad en un caso particular. Pero la inseguridad jurídica surge también si se acumulan demasiadas y complicadas

disposiciones legales respecto de un hecho, de modo que ‘nadie las conoce ya a fondo’, o si las disposiciones referidas a un hecho son modificadas rápidamente varias veces, de tal forma que los ciudadanos no tienen tiempo de acostumbrarse a una situación jurídica y de ser versados en ella” (Geiger, 1983, pág. 92).

c.- Desde el punto de vista del tribunal constitucional.

El Tribunal Constitucional ha definido este concepto en los términos siguientes: “condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran; representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio”.

La expresión “seguridad jurídica” quiere decir entonces que el Estado tiene que velar porque el orden normativo se cumpla a cabalidad en todos aspectos de la vida nacional. Este concepto está hoy en día en la base misma del orden de los países modernos, porque no hay nación desarrollada donde no se asuma como obligatorio el cumplimiento de las normas nacionales. Únicamente donde las normas se respetan y se cumplen, donde la vida discurre dentro de la previsibilidad del Derecho, son posibles los emprendimientos comerciales y productivos capaces de generar empleo a gran escala.

3.4. La seguridad jurídica y el derecho penal

Tal cual se puede advertir de la lectura de diversos autores, la seguridad jurídica tiene una estrecha ligazón con lo que corresponde la aplicación de las sanciones en el ordenamiento jurídico, así lo explica el jurista Calderón Guillermo (2009) en su obra titulada: *Seguridad jurídica y Derecho Penal*, de donde se recoge lo siguiente:

La relación entre la seguridad jurídica y el derecho penal resulta evidente. Muchos de los principios que se estudian dentro del tema de los límites al ejercicio de la potestad punitiva estatal suelen justificarse con la idea de la seguridad jurídica (pág. 181).

Resulta evidente el enlace que se ubica entre la categoría jurídica de seguridad jurídica y los límites establecidos para controlar el ius puniendi del Estado, lo cual toma sentido al colocar esta postura frente a la idea del garantismo que se presume como característica de esta ciencia.

Resulta importante tener en cuenta la concepción del maestro argentino Zaffaroni, quien según la crítica realizada por Freedman Diego (2004) en su ensayo titulado: *Comentario a derecho penal. parte general de Eugenio Raul Zaffaroni, Alejandro Alagia Y Alejandro Slokar. (Ediar, Buenos Aires, 2000)*, en el cual refiere lo siguiente:

Debe tenerse en cuenta que el punto de partida de Zaffaroni es la existencia de una tensión dialéctica constante entre dos Estados que conviven en la realidad: el Estado de derecho y el Estado de policía. En el primero, todos los individuos son sometidos a la ley y rigen los principios limitadores constitucionales e internacionales, en cambio en el Estado de policía los habitantes se encuentran subordinados a los mandatos del poder. El estado de derecho, constantemente, intenta contener al poder punitivo ejercido por el estado de policía y serán las agencias judiciales, las que a través de sus decisiones racionales, tendrán la ardua tarea de reducir al estado de policía (págs. 444-445).

Esta posición inicial del maestro citado, conduce a la idea de que incluso el poder punitivo del Estado requiere de una estructura para su control efectivo y necesariamente debe darse en ese contexto a fin de lograrlo, siendo lo más resaltante el hecho de que la tensión a la que se refiere provoca en ocasiones el quiebre de ciertos aspectos de control como el exceso en tanto se refiere a la punición, alterando la vigencia de la seguridad jurídica; esto es para el caso que nos ocupa la base del problema identificado, así se explicarían los excesos sancionatorios que establecen algunos tipos penales sólo con el afán persecutorio de la acción delictiva, que sin duda alguna se justifica pero que debe respetar los límites constitucionales; esto último si reflejaría seguridad jurídica.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Análisis del caso de Silvana Buscaglia Zapler en relación al resultado de las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque.

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal; que para mayor detalle del entendimiento del objeto de análisis de esta investigación se trasladan los acápites desarrollados en el proyecto de tesis en los que se han marcado la población y la muestra.

Población.

El universo o población de nuestra investigación está determinada por el estudio y análisis de las sentencias expedidas en los Juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el del distrito judicial de Lambayeque durante el año 2018, relacionadas al tratamiento o la aplicación del principio de proporcionalidad en dichas resoluciones.

Muestra.

Teniendo en cuenta la cantidad de procesos sentenciados según la información que se ha obtenido del Sistema de Información Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, respecto a los Juzgados Penales de la ciudad de Chiclayo que en promedio alcanzan la cantidad de 100 sentencias durante el año 2018, se ha obtenido como muestra el análisis del 10% de esta cantidad, lo cual alcanza al análisis diez expedientes en cuyas sentencias se aplicará el criterio de observación que permitirá identificar el criterio del juzgador bajo el parámetro de la proporcionalidad aplicado en la determinación de la sanción penal.

4.1. Análisis de los resultados:

Tal cual lo detallado anteriormente, se procede a plasmar los resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera:

4.1.1. Resultados de del análisis de sentencias.

Para el reconocimiento de los casos que han sido atendidos en la instancia de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo se acudió a las oficinas del Sistema de Información respecto a los casos sobre desobediencia a la autoridad, de cuyo resultado se ha podido observar que en 100 de los casos se ha alcanzado sentenciar en promedio de entre los juzgados, por lo que aplicando la selección del 10 % de estas sentencias, se han escogido al azar los siguientes expedientes, para verificar si es que se está aplicado una sanción que resulta desproporcional con el daño ocasionado por la acción delictiva los cuales se plasman en el siguiente cuadro:

Tabla 1: Cuadro de expedientes seleccionados para el análisis de sentencias correspondientes a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

01240-2017-13-1706-JR-PE-07	SENTENCIADO/ RESUELTO
09674-2016-83-1706-JR-PE-07	SENTENCIADO/ RESUELTO
01911-2017-81-1706-JR-PE-07	SENTENCIADO/ RESUELTO
09348-2018-28-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
05205-2016-5-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
00582-2013-92-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
00582-2013-56-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
00582-2013-12-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
00582-2013-0-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
TOTAL	10 EXPEDIENTES

De estos expedientes seleccionados previamente, se ha recogido las sentencias para el análisis correspondiente, el mismo que se ha considerado tratar bajo la siguiente guía de observación.

Objeto de Observación: Verificar si en su composición argumentativa aparece como elemento de motivación de la decisión el principio de proporcionalidad desarrollado para la aplicación de la sanción penal impuesta.

Guía de Observación:

Tabla 2: Resultado de la aplicación de la Guía de observación, aplicada sobre las sentencias de los expedientes seleccionados en la tabla 1, de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Criterio de observación	Cantidad expedientes
- Debida motivación en base al examen de proporcionalidad en las sentencias penales.	0
- Aplicación directa de la sanción impuesta en el tipo penal.	7
Aplicación del sistema de tercios	3
- Pena Proporcional al daño producido	3

Fuente: Elaboración propia.

Resultados: Tal cual se puede observar de la tabla que antecede, se aprecia que el principio de proporcionalidad en las sentencias penales no tiene ningún protagonismo, sin duda alguna tiene relación con la ausencia de motivación dada la aplicación directa de la sanción impuesta en el tipo penal, lo cual se puede identificar de la cantidad expuesta como 7 de 10 expedientes que corresponde a la muestra; lo cual no impide mencionar el hecho de que de alguna manera se relaciona la aplicación del sistema de tercios para la determinación de la sanción penal con la proporcionalidad de la pena, que sin duda alguna es una herramienta apropiada pero su aplicación no se aprecia con mayor incidencia en el ámbito jurisdiccional. En conclusión según el objeto de análisis se puede señalar que los magistrados del poder judicial no aplican el principio de proporcionalidad en las sentencias penales como motivación de las sanciones impuestas.

4.1.1. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación.

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones.

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente como sigue:

Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.

1. Los principios son reglas de optimización que permiten la aplicación correcta de las reglas del derecho.	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	40
b. En Desacuerdo	07
c. NO Opina	03
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 01, a la pregunta planteada 1. Los principios son reglas de optimización que permiten la aplicación correcta de las reglas del derecho, de un total de 50 muestras realizadas, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 07 de ellos indicaron No estar de acuerdo-

Ilustración 1: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.

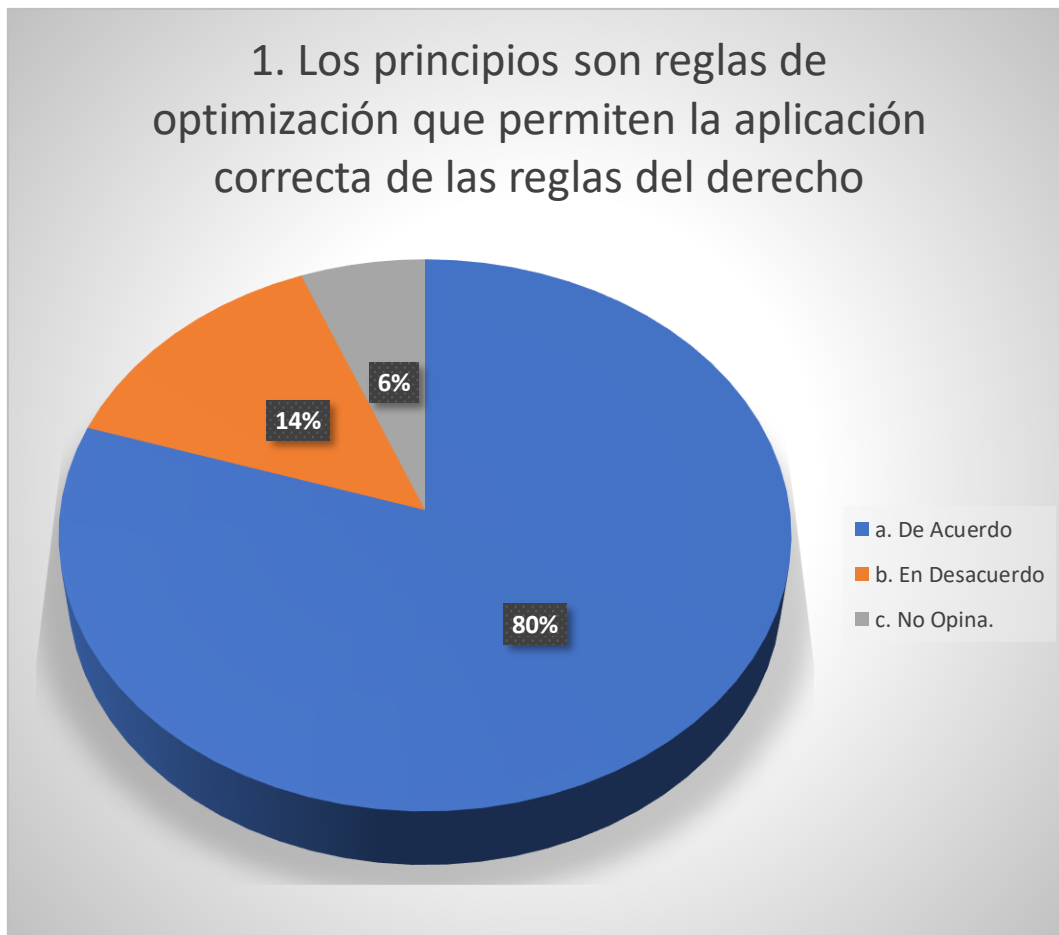


Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.

**2. La función de la proporcionalidad es ante la controversia
suscitada respecto a la aplicación de dos principios o
derechos en colisión, saber cuál de ellos habrá de prevalecer
sobre un caso en concreto.**

ALTERNATIVA	CANTIDAD
d. De Acuerdo	40
e. En Desacuerdo	04
f. NO Opina	06
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 02, a la pregunta planteada: La función de la proporcionalidad es ante la controversia suscitada respecto a la aplicación de dos principios o derechos en colisión, saber cuál de ellos habrá de prevalecer sobre un caso en concreto; de un total de 50 muestras realizadas, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 04 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 06 No opinaron al respecto.

Ilustración 2: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque

La función de la proporcionalidad es ante la controversia suscitada respecto a la aplicación de dos principios o derechos en colisión, saber cuál de ellos habrá de prevalecer sobre un caso en concreto

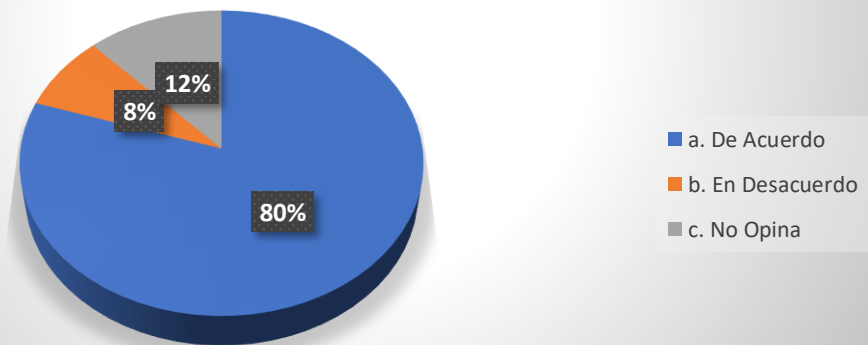


Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.

3. 3. La aplicación del principio de proporcionalidad debe ser obligatoria al momento que los magistrados motiven y argumenten sus sentencias penales	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
g. De Acuerdo	40
h. En Desacuerdo	04
i. NO Opina	06
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 03, a la pregunta planteada: 3. La aplicación del principio de proporcionalidad debe ser obligatoria al momento que los magistrados motiven y argumenten sus sentencias penales; de un total de 50 muestras realizadas, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 04 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 06 No opinaron al respecto.

Ilustración 3: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque

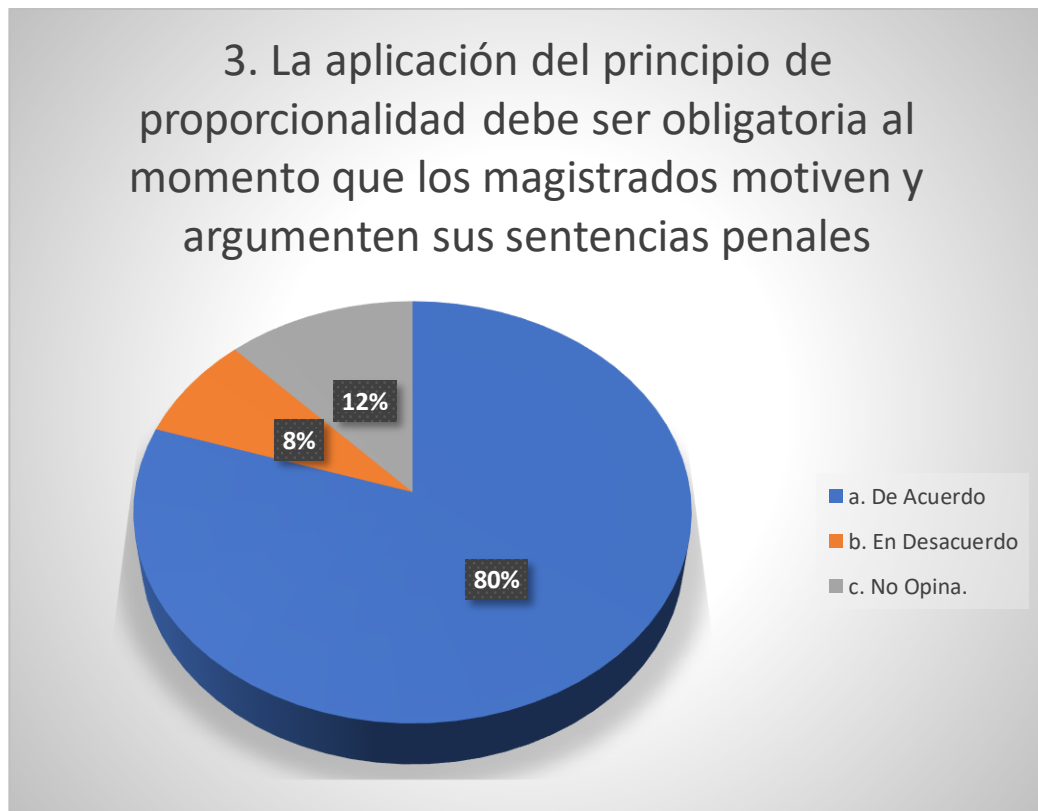


Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.

4. La seguridad jurídica es un principio que para el derecho penal importa la garantía del cumplimiento de las reglas positivas.

ALTERNATIVA	CANTIDAD
j. De Acuerdo	40
k. En Desacuerdo	06
l. NO Opina	04
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 04, a la pregunta planteada: La seguridad jurídica es un principio que para el derecho penal importa la garantía del cumplimiento de las reglas positivas; de un total de 50 encuestados, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 06 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 04 No opinaron.

Ilustración 4: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque

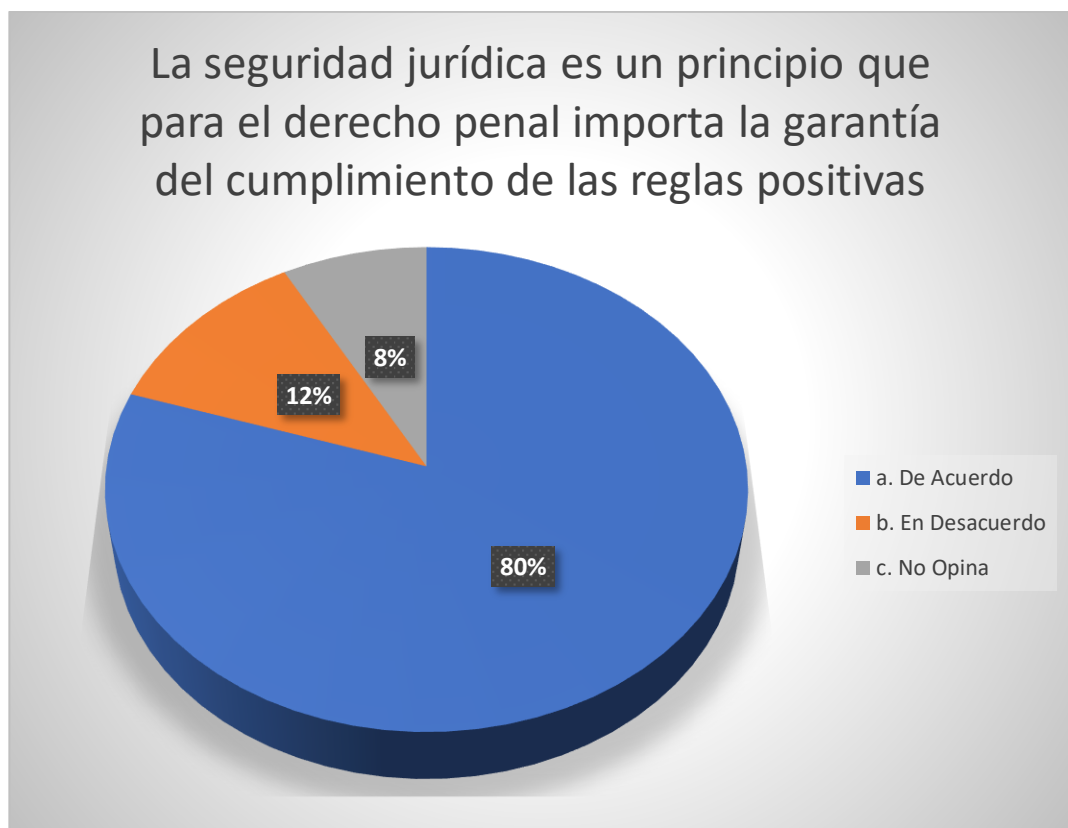


Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.

5. Sobre la aplicación del derecho penal importa el control que ejerce la seguridad jurídica, por lo mismo que las reglas penales deben estar sometidas a un constante análisis a fin de evitar que superen el principio de mínima intervención del Derecho Penal.

ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	40
b. En Desacuerdo	08
c. NO Opina	02
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 05, a la pregunta planteada: Sobre la aplicación del derecho penal importa el control que ejerce la seguridad jurídica, por lo mismo que las reglas penales deben estar sometidas a un constante análisis a fin de evitar que superen el principio de mínima intervención del Derecho Penal; de un total de 50 encuestados, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 08 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 02 No opinaron.

Ilustración 5: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque

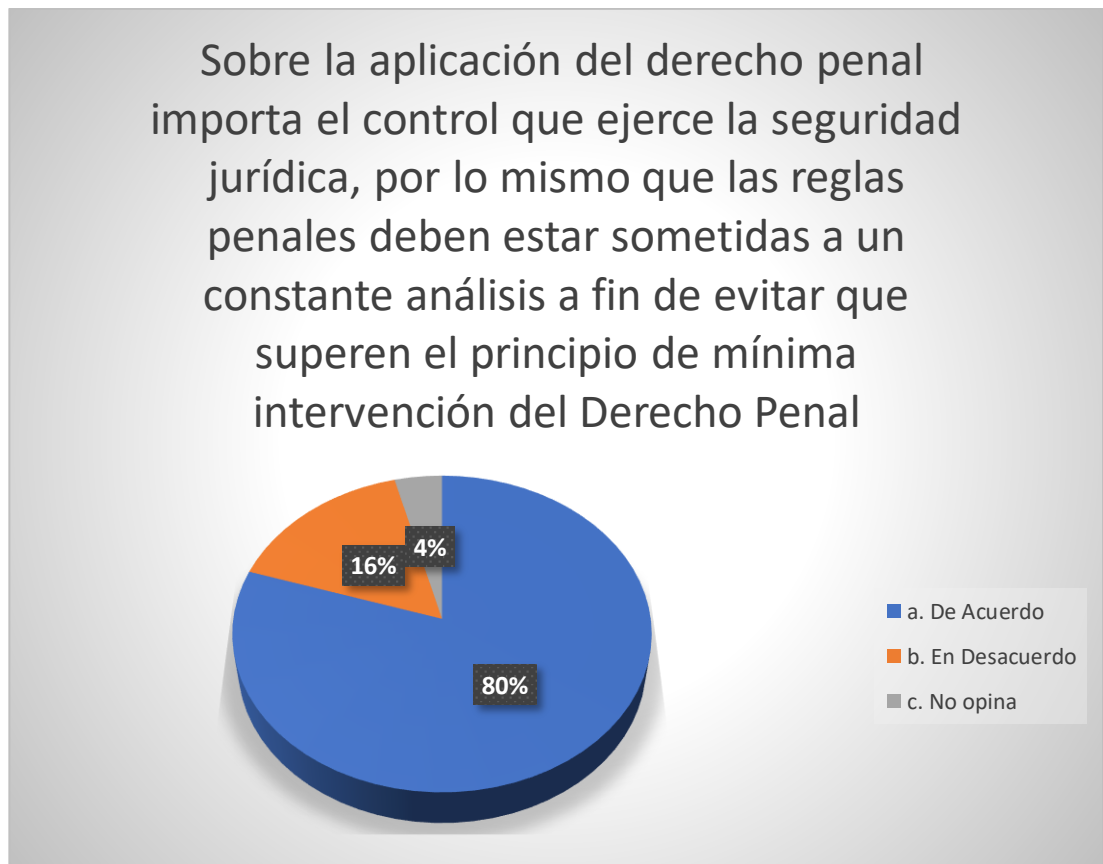
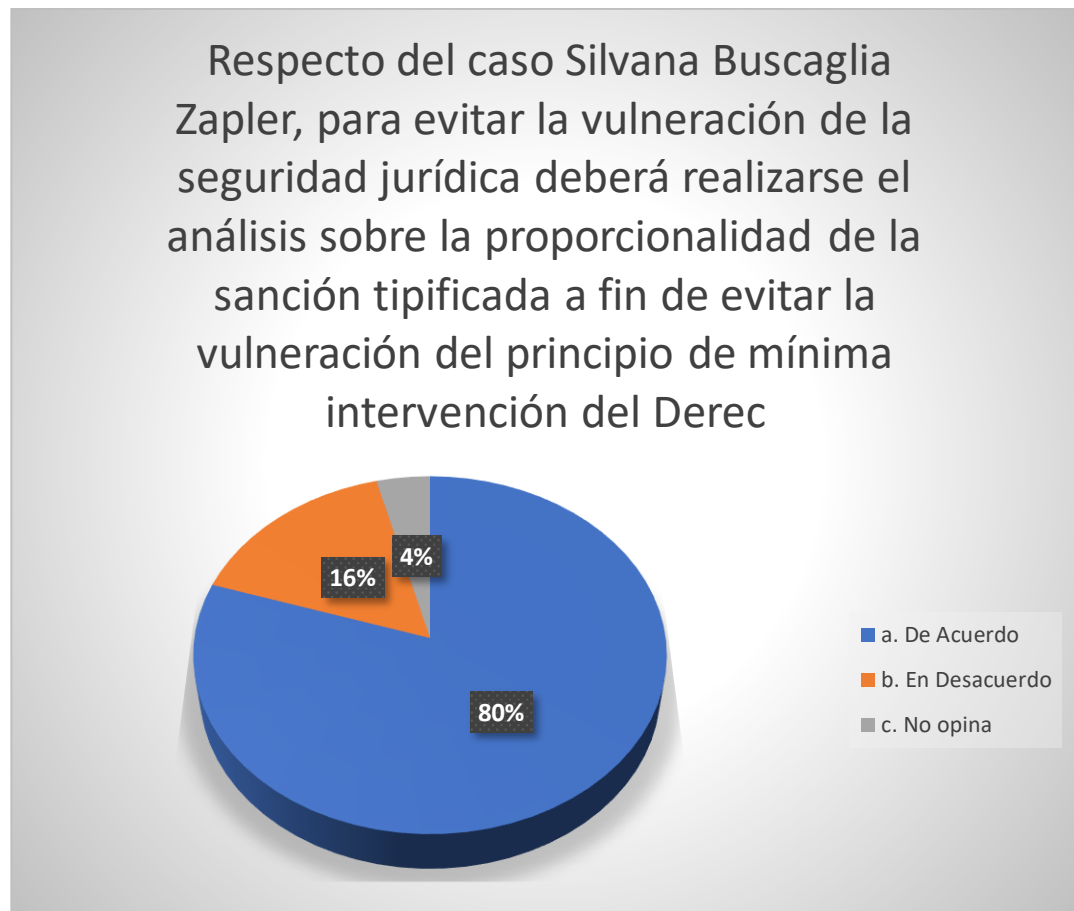


Tabla 8: Resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque.

<p>06. Respecto del caso Silvana Buscaglia Zapler, para evitar la vulneración de la seguridad jurídica deberá realizarse el análisis sobre la proporcionalidad de la sanción tipificada a fin de evitar la vulneración del principio de mínima intervención del Derecho Penal.</p>	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
d. De Acuerdo	40
e. En Desacuerdo	08
f. NO Opina	02
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 06, a la pregunta planteada: Respecto del caso Silvana Buscaglia Zapler, para evitar la vulneración de la seguridad jurídica deberá realizarse el análisis sobre la proporcionalidad de la sanción tipificada a fin de evitar la vulneración del principio de mínima intervención del Derecho Penal; de un total de 50 muestras realizadas, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 08 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 02 No opinaron.

Ilustración 6: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque



CAPÍTULO V

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir.

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente el principio de proporcionalidad para verificar su aplicación en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque”

¿Qué es el principio de proporcionalidad?

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la investigación se enfoca directamente sobre el eje temático de la proporcionalidad, es que se estructuró como primer objetivo específico al desarrollo doctrinario de dicho principio que finalmente genera una herramienta de control constitucional como lo es su examen, en se sentido es que se de iniciar la discusión con la determinación siguiente:

- ¿Qué son principios?

Tal cual se ha podido reconocer de la doctrina jurídica, el concepto de principios está relacionado con la percepción de un esquema que organiza, esto es la pauta que postula los límites de la acción, la ruta que marca el camino del ejercicio para el caso del derecho; siendo así los principios ofrecen un lineamiento que funciona como la directriz para la aplicación del derecho.

Toda esta estructura está condicionada para alcanzar la optimización del derecho en su aplicación, dejando a su vez márgenes de permisibilidad que constituyen los alcances jurídicos de los mismos, posición que genera la cualidad de control de los derechos por lo mismo que ninguno de ellos tiene el carácter de absoluto.

- ¿Cómo se constituye el principio de proporcionalidad en el derecho?

La finalidad del derecho como tal es lograr el control social, en efecto su consecución dependerá de la forma en que se aplican las reglas y esto a su vez depende de la manera en que se originan, así las bases teóricas que fundamentan la creación de una norma tienen su principal basamento en los principios.

Teniendo en cuenta esta relación originaria se puede apreciar a la proporcionalidad como aquella directriz que permite ejercer el control equilibrado del ejercicio del derecho y con ello evitar los abusos; así el principio en mención tiene como primera tarea la dosificación de los efectos que producen los derechos fundamentales, que en esencia se concentra en las facultades y libertades que tienen los seres.

¿Qué tan apropiado u obligatorio resulta la aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales

Se debe empezar señalando que, en el Perú, se ha incorporado un sistema judicial de determinación de la pena de tendencia mixta, es decir, se caracteriza porque son los jueces a quienes corresponden la determinación de la pena en el caso en concreto, sin embargo tal procedimiento está condicionado por unas decisiones previas del legislador, acerca a la calidad y cantidad de pena. Por lo que, la discrecionalidad judicial, en cuanto a la determinación de la consecuencia

jurídica no es ilimitada, pues además de las decisiones del legislador, relativas a la clase de pena a imponer según sea el delito, los jueces tendrán que tener en cuenta un conjunto de circunstancias (agravantes y atenuantes genéricas), así como la de otros factores, para determinar en el caso en concreto, el quantum de ella.

Asimismo, en este sistema judicial de determinación de la pena, se distinguen tres etapas: Determinación legislativa de la pena, individualización judicial de la pena, e individualización operativa de la pena. La primera fase hace referencia a la adopción por parte del legislador de las decisiones en abstracto respecto de las penas y las medidas de seguridad que le siguen a la comisión de un delito; la segunda fase corresponde a la individualización de la pena en concreto por parte del Juez, etapa que guarda relación con el problema relativo a los espacios de discrecionalidad asignados a la función judicial, a la libertad que tienen los jueces de elegir, una vez demostrada comisión de un hecho punible, si hay o no lugar a pena, la calidad y cantidad de ella; y por último, la tercera hace referencia a las decisiones relativas a la ejecución de la pena.

Siendo ello así, para atender los objetivos en el presente trabajo de investigación, se tratarán las cuestiones implicadas en la segunda fase, para lo cual consideramos pertinente realizarnos la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los jueces de aplicar el principio de proporcionalidad para realizar el control constitucional en concreto, de las decisiones en abstracto realizadas por el legislador, relativas a la pena y que afectan derechos fundamentales?; lo cual no es más que preguntarse: ¿podrían, los jueces, apoyados

en razones motivadas, superar el marco delineado en abstracto por el legislador para la determinación judicial de la pena?

Para hallar la respuesta a las interrogantes realizadas en el párrafo anterior, es necesario determinar cómo han de interpretarse las normas creadas por el legislador para la determinación de la pena. Si, por un lado, estas son mandatos de definitivos e inamovibles para los jueces, con lo cual las posibilidades de aplicar el principio de proporcionalidad en la determinación judicial de la pena son escasas; y por otro, estos preceptos incorporan mandatos abstractos relativos a la determinación de la pena en el caso en concreto, los cuales pueden llegar a entrar a colisión con otras normas que aconsejan minimizar la intensidad de la pena, con lo cual se podría encontrar en el principio de proporcionalidad una herramienta adecuada para apartarse de las decisiones adoptados por el legislador en el momento de la determinación legal de la pena. Siendo que a favor de esta última interpretación, está el hecho de que las decisiones legislativas se adoptan en abstracto, características que puede dar lugar a que en el caso concreto, el cumplimiento del mandato legislativo resulte desproporcional.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la vinculación de los jueces a las decisiones del legislador, cuando se trata de optar en un sentido distinto al señalado en abstracto en la ley penal, se deberá presentar exhaustivamente las razones que aconsejan a tal proceder, siendo el principio de proporcionalidad la herramienta para efectuar tal tarea. Precisamente, la regulación de este mandato en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal supone la previsión por parte del legislador de que lo que es proporcional en abstracto puede presentarse

en el caso concreto como desproporcional; **radicando en este aspecto la importancia de la aplicación en las sentencias penales del principio desarrollado.**

TOMA DE POSTURA:

Resulta imprescindible tener en cuenta que el principio de proporcionalidad, es un principio constitucional que pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del ius puniendi que tiene el Estado; asimismo también se debe tener en cuenta que una de las funciones que cumple el referido principio, es el control constitucional de las legislación, con el fin de tutelar los derechos fundamentales, y lograr el respeto de la dignidad humana.

Asimismo, su importancia radica en el deber de los jueces de decidir, en un caso en concreto, cuanta pena van a imponer, con la finalidad de evitar que lo que el legislador no pudo prever en el proceso de criminalización, no termine con penas fijadas en las sentencias penales, desproporcionadas. Siendo menester precisar que si un Juez Penal actúa de esa manera, al momento de emitir su sentencia, no es arbitrario, por cuanto solo está realizando una interpretación armónica de las disposiciones normativas que regulan la determinación judicial de las penas; cumpliendo con su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales afectados por la pena, por cuanto tal obligación está justificada en que la determinación judicial de la pena no solo se reduce a un simple acto de subsunción sino que debe ser fijado con respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la teoría de la seguridad jurídica en el proceso penal”.

Respecto a este punto, la relación entre la seguridad jurídica y el Derecho Penal resulta evidente, por cuanto la mayoría de los principios que se estudian dentro del tema de los límites al ius puniendi de Estado, es decir, a la potestad punitiva estatal, suelen justificarse con la idea del principio de seguridad jurídica

Por otro lado, es menester partir de que si bien el principio de seguridad jurídica no ha sido incorporado expresamente por la Constitución, el Tribunal Constitucional ha señalado, en su STC Exp. N° 00016-2002-AI/TC fundamento 4, que se trata de un contenido constitucional implícito, que se manifiesta en varias disposiciones de nuestra Carta Magna, algunas de orden general, como la contenida en el artículo 2, inciso 24, párrafo a (que prescribe: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”), y otras de orden más específico, como las contenidas en los artículos 2, inciso 24, párrafo d (que prescribe: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”), y la contenida en el artículo 139, inciso 3 (que prescribe: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación”).

Así, al momento de intentar esbozar una definición de seguridad jurídica, existe una falta de uniformidad; así por ejemplo, BUENO ARUS (“El artículo 9 de la Constitución y el Derecho Penal en Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar de la

Constitución”) señala que: *“La seguridad jurídica, en tensión permanente con el valor superior de la justicia (...), significa la <predictibilidad> de las consecuencias jurídicas de los actos o conductas personales, pero, por razón del carácter progresivo de la vida social y de sus estructuras, no puede considerarse como absoluta, sino que debe ser compaginada y encontrar su límites en otros principios consagrados por la Constitución y en la propia dinámica del Derecho”*; por otra lado, FERRERES COMELLA (“El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia”) señala que: *“es la certeza jurídica, entendida como la posibilidad de predecir el contenido de los actos del poder público a partir de la lectura de los textos jurídicos relevantes (por sí mismo, o a través de un abogado), puedan anticipar cuáles serán las consecuencias penales de sus posibles acciones u omisiones”*.

Por otro lado, el procesalismo contemporáneo, se refiere cada vez más a la seguridad jurídica en un sentido dinámico, en atención a la efectividad real de los derechos fundamentales y la idea de proceso justo, considerando que esta debe ser medida por la estabilidad de su finalidad: esto es, teniendo en la efectividad de los derechos y no como fin en sí mismo. Desde esa perspectiva, no se busca más la seguridad jurídica como un concepto absoluto, sino la seguridad jurídica afectada por un coeficiente, de una garantía de la realidad.

TOMA DE POSTURA:

Como se aprecia, existe una disparidad de concepciones acerca de la definición de la seguridad jurídica; sin embargo no es de interés en el presente trabajo, criticar las definiciones que se han formulado por los doctrinarios, ni proponer un concepto propio del referido principio. En vez de ello, prefiero precisar el contenido que garantiza la seguridad jurídica, siendo el referido, según el Tribunal Constitucional, conforme lo ha

referido en su STC Exp. N° 0001-2003-AI/TC: “busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad”; en ese sentido el principio de seguridad jurídica no busca garantizar a rajatabla cualquier decisión, incluso las antijurídicas, por el contrario, lo que protege son las expectativas razonablemente fundadas que se generan cuando se actúa conforme a Derecho. Por lo que, como puede advertirse, no avala cualquier posibilidad de incurrir en arbitrariedad, y menos aun la blindar o proteger.

En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional Peruano, en su STC N°00016-2002-AI/TC, ha referido que: *“El principio in comento no solo supone la absoluta pasividad de los poderes públicos, en tanto no se presenten los supuestos legales que les permitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones jurídicas, mediante la <<predecible>> reacción, sea para garantizar la permanencia del statu, porque así el el Derecho lo tenía preestablecido, o en su caso, para dar lugar a las debidas modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal”.*

Lo indicado en el párrafo anterior por el Tribunal Constitucional del Perú sobre la seguridad jurídica es claro: no existe oposición a la posibilidad de que un órgano judicial ante una pena desproporcional, realice el test de proporcionalidad en aras de que se repare de ese modo lo dispuesto en la desproporcionada fijación de la pena abstracta por los legisladores.

De esa manera, no puede considerarse que la protección de penas desproporcionadas satisfaga la idea de razonable predictibilidad a la que remite el mandato de seguridad jurídica. Y es que sobre la base de consideraciones antijurídicas no

hay seguridad ni previsión posible. Conviene tener presente más bien que toda decisión antijurídica es contraria al principio de seguridad jurídica; **en ese sentido, el efecto que produce la aplicación del principio de proporcionalidad sobre el principio de seguridad sería positivo, y no como algunos críticos refieren, que en sentido contrario se vulneraría, al permitir que la pena se imponga por debajo del mínimo legal previsto para un tipo penal.**

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar el caso de Silvana Buscaglia Zapler para relacionarlo con el análisis de las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque”.

Hechos denunciados en el caso Silvana Buscaglia:

Con fecha 17 de diciembre de 2016, la persona de Silvana Buscaglia Zapler agredió al efectivo policial de tránsito Elías Quispe Carbajal, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en circunstancias en que este procedió a imponerle la papeleta respectiva por haberse estacionado en una zona prohibida. La condenada respondió, bajando de su vehículo, empezando a vociferar frases “aléjese de mi carro”, “aléjese para no atropellarlo”, empujándolo. Luego y tras la confrontación del referido efectivo del orden reprochándole por su accionar, la señora Buscaglia le propina un manotazo quitándole el casco, volviendo a empujarlo.

Se le intervino, por tratarse de un supuesto de flagrancia de la comisión del delito de Violencia y resistencia a la autoridad en forma agravada, previsto en el artículo 366° del Código Penal con la agravante contenida en el artículo 367° inciso 3 del mismo Cuerpo de Leyes, por lo que se procedió con la incoación de Proceso Inmediato.

Dicho caso, se siguió ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, donde se declaró procedente la incoación del proceso inmediato, y el Fiscal presentó un acuerdo de terminación anticipada, logrado con la defensa de la procesada; por lo que mediante Resolución N° 4, de fecha 20 de diciembre de 2016, se resolvió aprobar el acuerdo de Terminación Anticipada, y se condenó a la procesada a una pena de 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva y 10 mil soles de reparación civil, de los cuales, 5 mil soles fueron para el Estado y 5 mil soles fueron para el señor Elía Quispe Carbajal.

La referida sentencia, fue arduamente criticada, especialmente por la desproporcionalidad de la pena impuesta; por cuanto en un análisis sistemático de las sanciones penales contempladas en nuestro catálogo penal, resulta ser una sanción incoherente frente a las que corresponde por la comisión de delitos de naturaleza más grave.

Por otro lado, por Resolución Suprema N° 108-2016-JUS, emitida el 27 de julio de 2016, se le concedió la gracia del indulto común y su libertad, teniendo en consideración que fue la primera vez que cometió un delito, que el bien jurídico es de mínima lesividad, la desproporcionalidad de la pena en comparación con la que suelen ser impuestas por la comisión de otros delitos y el que tuviera carga familiar que atender.

En el caso planteado **existe un conflicto** que debe ser solucionado a través del principio de proporcionalidad. Efectivamente, se encuentra que, **por un lado**, existen razones para la imposición de una pena de prisión de 8-12 años, como es la protección del bien jurídico Administración Pública, el cual tiene respaldo en el artículo 39° de la Constitución Política del Perú (que establece que: “(...) *los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación...*”, del cual subyace el principio de “buena

administración) y los fines asignados a la sanción en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal (el cual establece: “*la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora ...*”); y **por otro lado**, hay argumentos en contra de su aplicación: los derechos fundamentales afectados por este castigo (el derecho a la libertad), su régimen de ejecución y las condiciones desocializadoras de las instituciones carcelarias.

Se debe evaluar si tal proceder es idóneo, necesario y proporcional en sentido estricto:

a) Idoneidad: Este subprincipio supone evaluar si la pena que se impone en el caso concreto contribuye de algún modo a la satisfacción de los fines de la pena; siendo este juicio débil porque basta, para concluir que la medida legislativa es idónea, con el hecho de que posiblemente la pena favorezca la consecución de al menos uno de los fines.

- La pena contribuye a los fines preventivos negativos (generales y especiales), porque por su drasticidad puede pronosticarse que esta es intimidante, y por tanto idónea para disuadir a los infractores y terceros de la comisión de futuros delitos
- Respecto al fin resocializador, hay certeza de que la ejecución de una pena de prisión de larga duración es contraproducente para el logro de este fin.

En conclusión; al satisfacerse alguno de los fines de pena (preventivos), la pena es idónea.

b) Necesidad: No se trata de búsqueda de alternativas al derecho penal porque es terreno exclusivo del legislador, está vedado para los jueces cuando deciden el caso concreto; por el contrario este subprincipio implica la búsqueda de medios alternativos

dentro del catálogo de pena elaborado por el legislador, tratando de establecer si los medios alternativos alcanzan el fin que se persigue con un menor sacrificio o lesividad para los derechos fundamentales, pero con una idoneidad equivalente.

- Para realizar el juicio de necesidad sobre la pena de prisión de 8-12 años, esta debe compararse con otros medios alternativos que ostenten una menor lesividad, para determinar si son idóneos en una medida similar a la pena enjuiciada; el medio alternativo consistirá en la imposición de la pena de prisión en una cuantía inferior, esto podría llevar a dosificar la pena que le corresponde, por debajo del umbral mínimo del marco punitivo abstracto fijado para el delito de Violencia y resistencia a la autoridad
- En ese orden de ideas, se puede afirmar que una pena por debajo del umbral mínimo del marco punitivo abstracto fijado para el tipo penal denunciado es, sin duda, menos lesiva que aquella que se impondría conforme a las reglas del legislador; precisando que, la pena menor aunque es menos intimidante no renuncia a los fines preventivos, pero ello no es suficiente para afirmar que la pena de prisión de 8-12 años no es necesaria, aunque ello sí debe tenerse en cuenta para realizar el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.

c) Proporcionalidad en sentido estricto: Este subprincipio involucra una ponderación entre los beneficios de la aplicación de la pena para la protección de bienes jurídicos y los costos que implica para los derechos fundamentales. La idea es determinar si la satisfacción de los principios que respaldan la intervención logra compensar la afectación que se produce en los derechos fundamentales.

- Se debe partir evaluando el grado de afectación de los derechos fundamentales que se produce con la imposición de una pena de prisión de 8-12 años. Siendo así, en primer lugar, puede decirse que su alcance es considerable, teniendo en cuenta los derechos fundamentales que se restringen con la pena y su ejecución en un establecimiento penitenciario peruano; en segundo lugar, la afectación es segura por cuanto no concurre para ella ninguna circunstancia de menor punibilidad; en tercer lugar, la intensidad de la afectación que se produce en los derechos fundamentales con la imposición de esta pena puede considerarse alta, porque es mayor a la establecida en el derecho interno para hechos de mayor gravedad (como por ejemplo para el delito de Homicidio simple, de 6 años a 20 años).
- Posteriormente, para verificar la satisfacción del principio que respalda la intervención, se debe considerar que Silvana Buscaglia realizó un comportamiento consistente en ejercer violencia contra una autoridad policial, conducta que el legislador ha considerado que atenta contra la Administración Pública. Para determinar el grado de lesividad debe tenerse en cuenta que la Administración Pública es un bien jurídico colectivo y que la realización de la conducta generó un peligro abstracto, por lo que no puede valorarse como una actividad que causó un gran menoscabo para el referido objeto de protección (por cuanto es un delito de simple actividad, no es de resultado, y se consuma con la realización de la intimidación y violencia orientadas o en un vínculo causal hacia las finalidades típicas de impedir o trabar). En ese sentido, la satisfacción del principio que respalda la intervención podría estimarse baja.

- A lo anterior se añade que una pena entre 8-12 años de prisión no es correspondiente a la gravedad del delito cometido, es decir, no respeta el principio de proporcionalidad de la pena. Esto se respalda en la comparación con las penas establecidas en el ordenamiento para otros delitos de mayor gravedad, como por ejemplo, el homicidio. Por lo tanto, en el caso que se viene analizando se estaría prodigando una pena mayor para un delito de menor gravedad, porque sin duda es más grave atentar contra la vida humana independiente que contra la Administración Pública.
- Por otro lado, a fin de determinar el peso abstracto de los principios en conflicto, en primer lugar debe tenerse en cuenta que ambos tiene la misma jerarquía constitucional porque son reconocidos expresamente en la Constitución; en segundo lugar, los derechos fundamentales afectados con la imposición de la pena son prioritarios porque constituyen bienes individuales de especial importancia: la libertad, la igualdad y la dignidad humana; en cambio, los principios que justifican la intervención involucran la administración pública, que es un bien de carácter colectivo. En todo caso, podría decirse que los derechos afectados con la pena de prisión de 8-12 años ostentan un peso abstracto mayor.
- En ese sentido, imponer a Silvana Buscaglia una pena de prisión de 8-12 años es una intervención desproporcionada, porque constituye una afectación intensa en derechos fundamentales a los que se confiere especial importancia material por su vinculación con la libertad, la igualdad, la dignidad humana; siendo que con la pena solo se logra una satisfacción baja de protección del bien jurídico Administración Pública, principio que tiene

una importancia material menor respecto a los derechos fundamentales afectados por imposición de la referida pena de prisión.

- Por lo tanto, el Juzgador debe optar por un medio alternativo, esto es, una pena por debajo del mínimo legal atendiendo a la menor lesividad del comportamiento.

5.2. Resultado De Validación De Variables

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo:

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque.

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema.

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar si en las sentencias penales que se emiten en los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, para tal resultado tomarlo como referencia en la determinación de cuan apropiada o necesaria resulta este tipo de evaluación; en ese sentido, según lo observado en la realidad se ha podido apreciar que efectivamente no se motiva de una manera adecuada, es decir, no existe el refrendo de un análisis constitucional de la regla que se ha de aplicar como sanción, en tanto tipo penal, sobre un determinado sujeto como autor del hecho delictivo; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

En las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque no se aprecia la aplicación del principio de proporcionalidad como motivación de las decisiones.

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La seguridad jurídica en el proceso penal, a propósito del caso de Silvana Buscaglia Zapler.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación realizada.

Según lo recopilado, en la validación anterior resulta verificable de las sentencias de los juzgados penales que no se motivan las decisiones aplicando el principio de proporcionalidad como control constitucional de las leyes; lo cual invita al análisis del caso particular de Buscaglia que se configuró como un ejemplo jurídico de la superación del límite de mínima intervención del derecho penal, de cuyo análisis resulta que el problema principal que adolece esta decisión, análisis de proporcionalidad que arroja como resultado la ausencia de los elementos que examina el principio, los cuales de haberse ejecutado hubieran permitido una correcta aplicación de la sanción sin llegar al exagerado resultado que se conoce de este caso.

Todo ello deja como muestra el hecho de que la ausencia de este control de proporcionalidad que asegura la coincidencia de la regla con su aplicación en función de las garantías, sin duda alguna afecta la seguridad jurídica que ha de caracterizar al derecho penal, en su ámbito proteccionista de los derechos fundamentales; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

La ausencia de proporcionalidad en los casos como el de Silvana Buscaglia Zapler genera inseguridad jurídica en el proceso penal.

5.3. Contrastación De Hipótesis

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

Hipótesis conclusiva:

En las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque no se aprecia la aplicación del principio de proporcionalidad como motivación de las decisiones; por lo tanto esta falencia como en el caso de Silvana Buscaglia Zapler, genera inseguridad jurídica en el proceso penal.

Tabla 9: Cuadro comparativo de la contrastación de hipótesis.

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	
HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS CONCLUSIVA
Si, la aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque es inexistente; entonces, se estará produciendo un efecto negativo sobre la seguridad jurídica en el proceso penal, por lo mismo que deberá proyectarse su exigencia a fin de evitar excesos como el caso de Silvana Buscaglia Zapler.	En las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque no se aprecia la aplicación del principio de proporcionalidad como motivación de las decisiones; por lo tanto esta falencia como en el caso de Silvana Buscaglia Zapler, genera inseguridad jurídica en el proceso penal

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por sentado que la forma en que se desarrollan las sentencias penales con ausencia de motivación en base a la proporcionalidad como control de la constitucionalidad, hace que surjan problemas en la aplicación de las sanciones como es el caso emblemático de Silvana Buscaglia Zapler, circunstancia que ha generado inseguridad jurídica y afectación de los derechos fundamentales y el principio de mínima intervención del derecho penal.

CONCLUSIONES

PRIMERA:

Se concluye en función al desarrollo doctrinario del principio de proporcionalidad para verificar su aplicación en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque, que, tal principio constitucional pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del ius puniendi que tiene el Estado; asimismo se debe tener en cuenta que una de las funciones que cumple, es el control constitucional de la legislación, con el fin de tutelar los derechos fundamentales, y lograr el respeto de la dignidad humana.

Resulta importante precisar que si un Juez Penal aplica una sanción sin tal control, al momento de emitir su sentencia, no es arbitrario, por cuanto solo está realizando una interpretación armónica de las disposiciones normativas que regulan la determinación judicial de las penas; cumpliendo con su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales afectados por la pena; por cuanto, tal obligación está justificada en que la determinación judicial de la pena no solo se reduce a un simple acto de subsunción sino que debe ser fijado con respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

SEGUNDA

Se ha logrado determinar en función al estudio de la teoría de la seguridad jurídica en el proceso penal, que el contenido que garantiza la seguridad jurídica, según el Tribunal Constitucional que considera en la STC Exp. N° 0001-2003-AI/TC: “busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cual será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad”; lo cual se traduce en una suerte de

control de garantías que son ofrecidas por el Estado mismo a través de la Constitución Política.

En razón a ello, para el ámbito penal se ha reconocido una circunstancia desequilibrada en la configuración de las sanciones, esto es que no existe un orden proporcional para su inclusión en los tipos penales, característica que ha de ser solventada por los principios que cual reglas de optimización ejercen equilibrio en la aplicación del derecho; así en el proceso penal corresponde contemplarlos en la motivación que da sentido a los fallos penales.

TERCERA:

De acuerdo al análisis del caso Silvana Buscaglia Zapler relacionado con las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque, se ha logrado establecer dos aspectos puntuales que aportan el argumento de la propuesta sobre establecer la obligatoriedad de motivar los fallos penales a través de la aplicación del principio de proporcionalidad.

El primero referido a la discordancia entre la sanción aplicada con la lesión producida al bien jurídico protegido por el tipo penal, lo cual trae como consecuencia el segundo aspecto que motiva el análisis de la proporcionalidad de la sanción, cuyo desarrollo libera el juicio de idoneidad y necesidad, siendo la proporcionalidad en sentido estricto aquel que no logra superar la sanción analizada; todo ello permite determinar la utilidad de la aplicación de este examen como base en la motivación de las sentencias penales para evitar la trasgresión del principio de mínima intervención del derecho penal.

RECOMENDACIONES

PRIMERA:

Se recomienda a la Corte Suprema de la República la incorporación en la agenda de discusión del siguiente acuerdo plenario en materia penal, la problemática de la ausencia de aplicación del principio de proporcionalidad en la motivación que determinan la aplicación de las sanciones penales, a fin de garantizar la seguridad jurídica que se presume otorga el Estado en el proceso penal.

SEGUNDA:

Se sugiere al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la incorporación del control jurídico de las decisiones judiciales en el ámbito penal a fin de controlar la aplicación proporcional de las sanciones que vulneran derechos fundamentales, acción que se connotará mediante la aplicación de una sanción jurídica a los magistrados, cuya decisión revisada en virtud de recurso impugnatorio resulte desproporcional, basada en el principio de compensación por error judicial, para resarcir el daño producido sobre el justiciable, en atención al inciso 5 del Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal.

Bibliografía

- Aleinikoff, T. A. (2015). *El derecho constitucional en la era de la ponderación* (Primera ed.). Lima: Palestra Editores.
- Arrázola Jaramillo, F. (2014). El concepto de seguridad jurídica, elementos y amenazas ante la crisis de la ley como fuente del derecho. *Revista de Derecho Público*(32), 1-27.
- Calderón, G. O. (2009). Seguridad jurídica y Derecho Penal,. *Revista de Estudios de la Justicia*(11), 181-199. Obtenido de http://web.derecho.uchile.cl/cej/rej11/OLIVER%20_14_.pdf
- Carbonell, M. (2007). *Derechos fundamentales y acción de inconstitucionalidad*. Mexico: UNAM.
- Castañeda Deza, M. T. (2016). *El Principio De Seguridad Jurídica En La Determinación De La Pena En Las Circunstancias Atenuantes Privilegiadas Del Código Penal Peruano*. Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego. Obtenido de http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1979/1/RE_DERE_MARIA.CASTA%C3%91EDA_SEGURIDAD.JURIDICA.DETERMINACION_DATOS.pdf
- Castro Trigoso, H. (2009). *La prueba ilícita en el proceso penal peruano* (Primera ed.). Lima: Jurista Editores.
- CASTRO-GIRONA MARTINEZ, J. I. (1972). *La seguridad Jurídica en el tráfico de Bienes y Derechos, con especial énfasis en el tema del control de la legalidad y el uso de nuevas tecnologías en el ámbito notarial*. Madrid.

- Escobar Perdomo, D. M. (2011). *Importancia De La Naturaleza De La Función Notarial Y De La Seguridad Jurídica En La Legislación Notarial Guatemalteca*. Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala. Recuperado el 21 de Junio de 2017, de http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_8919.pdf
- Freedman, D. (2004). Comentario a derecho penal. parte general de Eugenio Raul Zaffaroni, Alejandro Alagia Y Alejandro Slokar. (Ediar, Buenos Aires, 2000). *Lecciones y Ensayos*(79), 443-461. Obtenido de <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/79/lecciones-y-ensayos-79-paginas-443-461.pdf>
- Geiger, T. (1983). *Estudios de sociología del derecho*. (A. Camacho, G. Hirata, & R. Orozco, Trads.) México: Fondo de Cultura Económica.
- Goldschmidt, J. (1961). *Principios Generales del Proceso* (Segunda ed.). Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- Landa Arroyo, C. (2015). La Constitucionalización Del Derecho Procesal Penal: El Nuevo Código Procesal Penal Peruano En Perspectiva. *Themis*(68), 181-191. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/15592/16041>
- Lino Rodríguez, L. B. (2015). *El Establecimiento Del Carácter Constitutivo De Inscripción Sobre Transferencia De Bienes Inmuebles En El Registro De Predios Garantiza La Seguridad Jurídica*. Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego. Recuperado el 23 de Junio de 2017, de http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/906/1/LINO_LIZETH_ESTABLECIMIENTO_CARACTER_CONSTITUTIVO.pdf

Luna Serrano, A. (2015). *La seguridad jurídica y las verdades oficiales del derecho*.

Madrid: Dykinson. Obtenido de

<https://books.google.com.pe/books?id=4Wm7CwAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Sentido+y+alcance+de+la+seguridad+jur%C3%ADdica:+la+certeza+de+la+juridicidad,+la+predecibilidad+de+su+apreciaci%C3%B3n+y+la+confianza+en+su+plasmaci%C3%B3n+luna+serrano&source=bl&ots=p>

Prieto, S. L. (2002). *Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial* (Primera ed.). Lima: Palestra Editores.

Roxin, C. (2000). *Derecho procesal penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto.

Rubio Correa, M. (2001). *El test de proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano* (Primera ed.). Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

ANEXOS

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

“El principio de proporcionalidad en las sentencias penales y la seguridad jurídica, a propósito del caso Silvana Buscaglia Zapler”

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

- I. La aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias penales del distrito judicial de Lambayeque.**
 1. Los principios son reglas de optimización que permiten la aplicación correcta de las reglas del derecho.
 - a. De acuerdo

- b. En desacuerdo
 - c. No opina.
- 2. La función de la proporcionalidad es ante la controversia suscitada respecto a la aplicación de dos principios o derechos en colisión, saber cuál de ellos habrá de prevalecer sobre un caso en concreto.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.
- 3. La aplicación del principio de proporcionalidad debe ser obligatoria al momento que los magistrados motiven y argumenten sus sentencias penales.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

II. La seguridad jurídica en el proceso penal, a propósito del caso de Silvana Buscaglia Zapler.

4. La seguridad jurídica es un principio que para el derecho penal importa la garantía del cumplimiento de las reglas positivas.
- a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.
5. Sobre la aplicación del derecho penal importa el control que ejerce la seguridad jurídica, por lo mismo que las reglas penales deben estar sometidas a un constante análisis a fin de evitar que superen el principio de mínima intervención del Derecho Penal.
- a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.
6. Respecto del caso Silvana Buscaglia Zapler, para evitar la vulneración de la seguridad jurídica deberá realizarse el análisis sobre la proporcionalidad de la sanción tipificada a fin de evitar la vulneración del principio de mínima intervención del Derecho Penal.
- a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

1. Información proporcionada por el Sistema de Información Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

	Fecha:
05240-2017-59-1706-JR-PE-01	EN TRAMITE(Pendiente)
05240-2017-0-1706-JR-PE-01	TRAMITE
03346-2018-0-1706-JR-PE-01	TRAMITE
02297-2014-16-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
03999-2015-78-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
1° JUZG. UNIPERSONAL	
05622-2012-50-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
07035-2012-66-1706-JR-PE-01	TRAMITE
JOSE RUPERTO MERINO IBEROS	
01562-2017-0-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
01562-2017-2-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
01562-2017-83-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
09068-2017-46-1706-JR-PE-01	EN CALIFICACION
02770-2014-91-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
02770-2014-0-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO

02770-2014-59-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
02770-2014-47-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
02770-2014-4-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
02770-2014-17-1706-JR-PE-01	ARCHIVO DEFINITIVO
01839-2014-0-1706-JR-PE-01	TRAMITE
01839-2014-96-1706-JR-PE-01	TRAMITE
01839-2014-24-1706-JR-PE-01	TRAMITE

10° JUZG PENAL UNIPERSONAL ESP. DELITOS
CORRUP. FUNCIONARIOS

00364-2012-73-1702-JR-PE-42	JUZGAMIENTO
00364-2012-22-1702-JR-PE-42	TRAMITE
00544-2010-0-1708-JR-PE-41	TRAMITE
00544-2010-30-1708-JR-PE-41	ARCHIVO DEFINITIVO
02660-2013-98-1706-JR-PE-02	EN EJECUCION
00477-2018-1-1706-JR-PE-02	TRAMITE

00477-2018-0-1706-JR-PE-02	TRAMITE
03588-2017-5-1706-JR-PE-02	EN EJECUCION
03037-2015-0-1706-JR-PE-02	EXHORTO PARA DILIGENCIAR
02719-2013-67-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
02719-2013-7-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
02719-2013-17-1706-JR-PE-02	EN EJECUCION
02719-2013-0-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
10170-2018-0-1706-JR-PE-02	TRAMITE
07066-2013-26-1706-JR-PE-02	EJECUCION
07066-2013-0-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
07066-2013-72-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
2° JUZG. UNIPERSONAL	
05735-2015-94-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
05735-2015-0-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
04563-2012-57-1708-JR-PE-02	EN RESERVA

09900-2016-20-1706-JR-PE-02	TRAMITE
09900-2016-1-1706-JR-PE-02	JUZGAMIENTO
09900-2016-0-1706-JR-PE-02	TRAMITE
00069-2014-0-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
00069-2014-59-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
05218-2018-0-1706-JR-PE-02	TRAMITE
00069-2014-62-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
05218-2018-4-1706-JR-PE-02	EJECUCION
00069-2014-80-1706-JR-PE-02	ARCHIVO DEFINITIVO
02157-2015-57-1706-JR-PE-02	EN CALIFICACION
02157-2015-52-1706-JR-PE-02	EN CALIFICACION
02157-2015-40-1706-JR-PE-02	EN CALIFICACION
02157-2015-0-1706-JR-PE-02	EN CALIFICACION
09068-2017-0-1706-JR-PE-03	TRAMITE

10370-2017-33-1706-JR-PE-04	TRAMITE
-----------------------------	---------

10370-2017-23-1706-JR-PE-04	TRAMITE
-----------------------------	---------

10370-2017-37-1706-JR-PE-04	TRAMITE
-----------------------------	---------

10370-2017-3-1706-JR-PE-04	TRAMITE
----------------------------	---------

CASTRO CHAFLOQUE PERLA DEL CARMEN

03688-2017-31-1706-JR-PE-04	TRAMITE
-----------------------------	---------

03688-2017-0-1706-JR-PE-04	TRAMITE
----------------------------	---------

12866-2018-0-1706-JR-PE-04	EN CALIFICACION
----------------------------	-----------------

02625-2014-49-1706-JR-PE-04	ARCHIVO DEFINITIVO
-----------------------------	--------------------

00448-2017-99-1706-JR-PE-05	TRAMITE
-----------------------------	---------

08837-2016-15-1706-JR-PE-05	ARCHIVO DEFINITIVO
-----------------------------	--------------------

08837-2016-71-1706-JR-PE-05	ARCHIVO DEFINITIVO
-----------------------------	--------------------

08837-2016-0-1706-JR-PE-05	ARCHIVO DEFINITIVO
----------------------------	--------------------

00448-2017-0-1706-JR-PE-05	TRAMITE
----------------------------	---------

10002-2016-65-1706-JR-PE-05	TRAMITE
-----------------------------	---------

02786-2017-0-1706-JR-PE-05	TRAMITE
02786-2017-92-1706-JR-PE-05	TRAMITE
00676-2017-0-1706-JR-PE-05	TRAMITE
10002-2016-30-1706-JR-PE-05	SENTENCIADO/ RESUELTO
10002-2016-0-1706-JR-PE-05	TRAMITE
00676-2017-54-1706-JR-PE-05	TRAMITE
08032-2017-0-1706-JR-PE-05	TRAMITE
08032-2017-68-1706-JR-PE-05	EN TRAMITE(Pendiente)
08032-2017-52-1706-JR-PE-05	SENTENCIADO/ RESUELTO
13020-2018-0-1706-JR-PE-05	EN TRAMITE(Pendiente)
04956-2014-51-1706-JR-PE-05	ARCHIVO DEFINITIVO
11374-2018-0-1706-JR-PE-05	TRAMITE
00981-2017-72-1706-JR-PE-05	EN TRAMITE(Pendiente)
00981-2017-0-1706-JR-PE-05	TRAMITE
06611-2015-63-1706-JR-PE-05	ARCHIVO DEFINITIVO

06611-2015-0-1706-JR-PE-05	ARCHIVO DEFINITIVO
04231-2017-91-1706-JR-PE-06	TRAMITE
04231-2017-0-1706-JR-PE-06	EN CALIFICACION
07057-2013-87-1706-JR-PE-06	ARCHIVO DEFINITIVO
00212-2016-28-1706-JR-PE-06	ARCHIVO DEFINITIVO
00212-2016-0-1706-JR-PE-06	ARCHIVO DEFINITIVO
02024-2018-0-1706-JR-PE-06	TRAMITE
09820-2016-0-1706-JR-PE-06	TRAMITE
CASTRO CHAFLOQUE PERLA DEL CARMEN	
02629-2014-68-1706-JR-PE-06	ARCHIVO DEFINITIVO
05637-2017-79-1706-JR-PE-06	TRAMITE
05637-2017-0-1706-JR-PE-06	EN TRAMITE(Pendiente)
6° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	
02651-2014-94-1706-JR-PE-06	ARCHIVO DEFINITIVO

02651-2014-44-1706-JR-PE-06	ARCHIVO DEFINITIVO
02651-2014-7-1706-JR-PE-06	ARCHIVO DEFINITIVO
02651-2014-0-1706-JR-PE-06	ARCHIVO DEFINITIVO
07473-2016-97-1706-JR-PE-07	TRAMITE
07473-2016-0-1706-JR-PE-07	TRAMITE
01581-2015-61-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
01581-2015-59-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
01581-2015-0-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
05301-2016-0-1706-JR-PE-07	EXHORTO PARA DILIGENCIAR
09421-2016-78-1706-JR-PE-07	TRAMITE
09421-2016-0-1706-JR-PE-07	TRAMITE
03628-2013-0-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
08178-2015-0-1706-JR-PE-07	EN TRAMITE(Pendiente)
08178-2015-4-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
01240-2017-63-1706-JR-PE-07	EN EJECUCION

01240-2017-13-1706-JR-PE-07	SENTENCIADO/ RESUELTO
-----------------------------	-----------------------

01240-2017-0-1706-JR-PE-07	TRAMITE
----------------------------	---------

09674-2016-83-1706-JR-PE-07	SENTENCIADO/ RESUELTO
-----------------------------	-----------------------

CASTRO CHAFLOQUE PERLA DEL CARMEN

05567-2018-94-1706-JR-PE-07	EN TRAMITE(Pendiente)
-----------------------------	-----------------------

05567-2018-11-1706-JR-PE-07	EN TRAMITE(Pendiente)
-----------------------------	-----------------------

05567-2018-0-1706-JR-PE-07	TRAMITE
----------------------------	---------

02456-2017-0-1706-JR-PE-07	TRAMITE
----------------------------	---------

02456-2017-93-1706-JR-PE-07	TRAMITE
-----------------------------	---------

02456-2017-50-1706-JR-PE-07	TRAMITE
-----------------------------	---------

02456-2017-6-1706-JR-PE-07	EN TRAMITE(Pendiente)
----------------------------	-----------------------

01160-2015-89-1706-JR-PE-07	TRAMITE
-----------------------------	---------

05041-2017-3-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
----------------------------	--------------------

04987-2015-27-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
-----------------------------	--------------------

04987-2015-7-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
----------------------------	--------------------

04987-2015-0-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
01911-2017-81-1706-JR-PE-07	SENTENCIADO/ RESUELTO
01911-2017-30-1706-JR-PE-07	TRAMITE
01911-2017-0-1706-JR-PE-07	EN TRAMITE(Pendiente)
PEREZ REYES DAVID	
03628-2013-40-1706-JR-PE-07	TRAMITE
09674-2016-0-1706-JR-PE-07	TRAMITE
03628-2013-44-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
05334-2014-11-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
09421-2016-82-1706-JR-PE-07	EJECUCION
01160-2015-0-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
7° JUZG. UNIPERSONAL	
00292-2013-0-1706-JR-PE-07	TRAMITE
00292-2013-53-1706-JR-PE-07	TRAMITE
00292-2013-32-1706-JR-PE-07	TRAMITE

01213-2015-14-1706-JR-PE-07	EN CALIFICACION
01213-2015-12-1706-JR-PE-07	TRAMITE
00292-2013-6-1706-JR-PE-07	TRAMITE
01213-2015-0-1706-JR-PE-07	TRAMITE
00292-2013-2-1706-JR-PE-07	EN CALIFICACION
03297-2015-37-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
03297-2015-36-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
03297-2015-0-1706-JR-PE-07	ARCHIVO DEFINITIVO
06028-2018-11-1706-JR-PE-07	TRAMITE
06028-2018-0-1706-JR-PE-07	TRAMITE
04581-2017-41-1706-JR-PE-08	CALIFICADO
04581-2017-0-1706-JR-PE-08	TRAMITE
09348-2018-28-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
09348-2018-0-1706-JR-PE-08	TRAMITE
05879-2015-80-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO

05879-2015-0-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
07621-2017-51-1706-JR-PE-08	EN TRAMITE(Pendiente)
07621-2017-0-1706-JR-PE-08	TRAMITE
PEREZ REYES DAVID	
06562-2015-17-1706-JR-PE-08	EN EJECUCION
06562-2015-0-1706-JR-PE-08	EN EJECUCION
05879-2015-61-1706-JR-PE-08	EN EJECUCION
05818-2016-14-1706-JR-PE-08	EJECUCION
05818-2016-5-1706-JR-PE-08	EN EJECUCION
05818-2016-0-1706-JR-PE-08	EJECUCION
00983-2016-73-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
00983-2016-0-1706-JR-PE-08	TRAMITE
00522-2016-51-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
00522-2016-43-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
00522-2016-0-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO

05205-2016-5-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
05205-2016-0-1706-JR-PE-08	TRAMITE
06029-2017-98-1706-JR-PE-08	TRAMITE
06029-2017-0-1706-JR-PE-08	TRAMITE
8° JUZG. UNIPERSONAL	
00582-2013-92-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
00582-2013-56-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
00582-2013-12-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
00582-2013-0-1706-JR-PE-08	SENTENCIADO/ RESUELTO
06834-2016-75-1706-JR-PE-08	EN CALIFICACION
06834-2016-48-1706-JR-PE-08	EN CALIFICACION
06834-2016-0-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
02197-2015-16-1706-JR-PE-08	EN CALIFICACION
02197-2015-13-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
02197-2015-0-1706-JR-PE-08	TRAMITE

}

06027-2014-92-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
06027-2014-65-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
06027-2014-0-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
03588-2017-38-1706-JR-PE-08	CON RESOLUCION CONSENTIDA
03588-2017-0-1706-JR-PE-08	CON RESOLUCION CONSENTIDA
05021-2012-57-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
04581-2013-53-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
04581-2013-52-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
04581-2013-41-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
04581-2013-0-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO
01052-2016-33-1706-JR-PE-08	EN TRAMITE(Pendiente)
01052-2016-0-1706-JR-PE-08	EN TRAMITE(Pendiente)
03902-2012-20-1706-JR-PE-08	ARCHIVO DEFINITIVO

8° JUZGADO UNIPERSONAL SUPRA. (ADIC.
FUNC. LIQUIDADORA)

03204-2001-75-1706-JR-PE-08	EN EJECUCION
03204-2001-21-1706-JR-PE-08	EN CALIFICACION
01699-2008-0-1706-JR-PE-08	EN EJECUCION

9° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y
CEED

08546-2015-39-1706-JR-PE-09	TRAMITE
08546-2015-0-1706-JR-PE-09	TRAMITE
05021-2012-53-1706-JR-PE-09	ARCHIVO DEFINITIVO
05021-2012-0-1706-JR-PE-09	ARCHIVO DEFINITIVO